

Medidas



**alternativas
al proceso**

**penal y a
la privación
de libertad**

**en la justicia
penal juvenil**

El caso Argentino

Clasificaciones JEL: C93, H11, H83, Z18

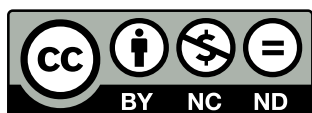
Palabras clave: servicios públicos, trámites, administración pública, COVID-19, pandemia, gobierno digital

Copyright © 2021 Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>) y puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas.

Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Nótese que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.



Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20577
www.iadb.org

El Sector de Instituciones para el Desarrollo fue responsable de la producción de la publicación.

Colaboradores externos:

Coordinación de la producción editorial: Sarah Schineller (A&S Information Specialists, LLC)

Revisión editorial: Juan Carlos Rueda Azcuénaga y Juan Mikán

Diseño y diagramación: .Puntoaparte Editores www.puntoaparte.com.co

Fotografías y Ilustración: www.shutterstock.com

Iconografía: www.thenounproject.com

Medidas alternativas al proceso penal y a la privación de libertad en la justicia penal juvenil

El caso Argentino

Equipo consultor

Carla Villalta y Valeria Llobet
(coordinadoras)

Marina Medan, Florencia Graziano
(investigadoras principales)

Agustín Barna

Federico Medina

Agostina Gentili

Julieta Nebra

Equipo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Deborah Dobniewski
(coordinadora)

Alejandra Daglio

Lucía Bebeacua

Editores

Mauricio García Mejía

Santiago M. Pérez-Vincent

Ilustración por Alphavector / Shutterstock.com

Contenido



Índice de gráficos y tablas

5 Pág.

Abstract

6 Pág.

Resumen ejecutivo

7 Pág.

La justicia restaurativa y la interdisciplina

14 Pág.

Características del estudio y diseño metodológico

35 Pág.

Caracterización del sistema penal juvenil en Argentina

41 Pág.

Conclusiones

81 Pág.

Referencias

83 Pág.

Índice de gráficos y tablas

Gráficos

- Gráfico 1.** Tipos de sistema penal juvenil por jurisdicción
- Gráfico 2.** Pasos y criterios de desjudicialización
- Gráfico 3.** Modelos organizativos de lo interdisciplinar en el ámbito judicial
- Gráfico 4.** Modelos organizativos de lo interdisciplinar con dispositivos del Poder Ejecutivo
- Gráfico 5.** Características de las tareas desarrolladas por los equipos/operadores interdisciplinarios
- Gráfico 6.** Perspectivas de articulación entre disciplinas
- Gráfico 7.** Tríada disciplinar típica de la justicia penal juvenil
- Gráfico 8.** Tipos de enfoques de la intervención interdisciplinaria

Tablas

- Tabla 1.** Síntesis de dimensiones facilitadoras y obstaculizadoras halladas en la literatura
- Tabla 2.** Cantidad de actores entrevistados por «tipo de actor»
- Tabla 3.** Leyes provinciales en lo penal juvenil
- Tabla 4.** Previsiones legislativas de medidas alternativas al proceso penal en las jurisdicciones seleccionadas
- Tabla 5.** Medidas alternativas al proceso utilizadas en las jurisdicciones seleccionadas según el actor que propone y el organismo que implementa
- Tabla 6.** Recursos interdisciplinarios existentes en las jurisdicciones seleccionadas según dependencia institucional y medida alternativa implementada
- Tabla A.1.** Recursos interdisciplinarios existentes según año de creación, dependencia, operadores y modalidad de contratación
- Tabla A.2.** Recursos interdisciplinarios existentes según dependencia y profesión

Abstract

Este artículo analiza el uso de recursos interdisciplinarios y la aplicación de medidas alternativas al proceso penal y a la privación de libertad en la justicia penal juvenil en seis jurisdicciones argentinas. Se desarrolla un análisis cuali-cuantitativo a partir de documentos institucionales y de entrevistas semiestructuradas con agentes del sistema. El estudio encuentra que, a pesar de que existe cierto consenso sobre los beneficios de desjudicializar la conflictividad sociopenal adolescente, el uso de medidas alternativas es generalmente bajo. La intervención interdisciplinaria en el tratamiento del delito adolescente también es un

desafío. La falta de formación específica en enfoques restaurativos de los operadores del sistema penal juvenil, la persistencia de rasgos inquisitivos en el abordaje penal, las debilidades en la gestión y en la disponibilidad de información sistematizada y la ausencia de políticas, previsiones legales y protocolos efectivos son las condiciones más usuales que limitan la utilización de medidas alternativas. A pesar de estos obstáculos, el análisis destaca algunas buenas prácticas y experiencias en la implementación de medidas alternativas al proceso penal y propone una serie de recomendaciones para promover su fortalecimiento y expansión.

Resumen ejecutivo

Los niños, niñas y adolescentes (NNyA) constituyen una población que requiere de políticas públicas específicas. La Convención sobre los Derechos del Niño y las Directrices de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la prevención de la delincuencia juvenil —entre otras normas internacionales— indican que los Estados deben garantizar un sistema de justicia especializado y diferente al de las personas adultas. Este sistema debe ofrecer las debidas garantías de un proceso penal, respetar los derechos de NNyA y promover sus posibilidades de crecimiento y desarrollo. La mínima intervención penal, el enfoque restaurativo y la utilización de la interdisciplina constituyen principios centrales en el abordaje de la conflictividad penal juvenil, los que deben conjugarse para que la finalidad de la intervención judicial sea educativa y conduzca a la inserción social de los adolescentes.

Este estudio presenta un marco de análisis para valorar el uso de recursos interdisciplinarios en la aplicación de medidas alternativas al proceso penal y a

la privación de libertad en la justicia penal juvenil. También examina la situación del sistema penal juvenil de seis jurisdicciones argentinas con el objetivo de favorecer e informar su fortalecimiento. El análisis abarca las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Neuquén, Santa Fe, Mendoza, y la Justicia Nacional de Menores.

Las preguntas que guiaron el análisis son:

¿Qué recursos interdisciplinarios tiene el sistema penal juvenil para desarrollar medidas alternativas al proceso y a la privación de libertad?

¿Cómo y para qué se usan esos recursos?



de derechos humanos de la infancia y fomentar la coordinación institucional y la utilización de recursos existentes.

El relevamiento realizado a partir de estos interrogantes permitió construir un diagnóstico sobre los avances realizados en materia penal juvenil en la República Argentina e identificar los obstáculos más persistentes para extender el enfoque de la justicia restaurativa en el sistema penal juvenil. El trabajo describe la cobertura, efectividad y sostenibilidad de los programas, acciones y experiencias alternativas al proceso penal y a la privación de libertad desarrollados en las seis jurisdicciones seleccionadas.

El estudio busca contribuir a la promoción de políticas públicas dirigidas a adolescentes infractores acorde a los estándares

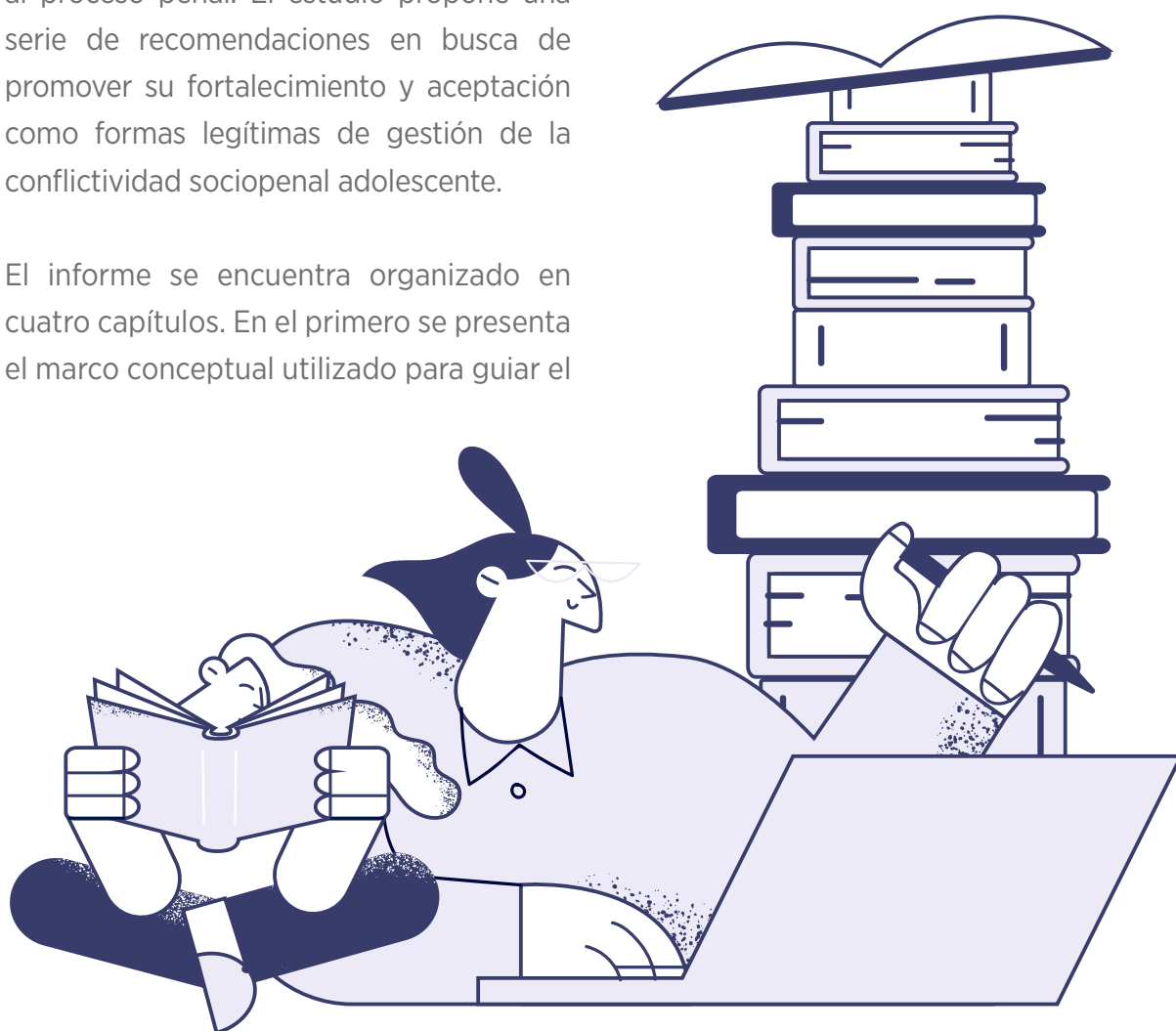
Los resultados alcanzados a partir del relevamiento efectuado muestran que la intervención interdisciplinaria (es decir, acuerdos entre diferentes perspectivas disciplinares y teóricas, horizontalidad e intercambio entre diferentes puntos de vista) en el tratamiento del delito adolescente es aún un desafío. La prevalencia de abordajes fragmentarios y superpuestos, la falta de autonomía técnica y la intervención centrada casi con exclusividad en la realización de informes constituyen rasgos persistentes que limitan la transformación de la justicia penal juvenil. Más allá de que exista cierto consenso en torno a los beneficios de desjudicializar el abordaje de la

conflictividad sociopenal adolescente, se ha identificado una utilización reducida de medidas alternativas al proceso penal y de prácticas restaurativas. La falta de formación específica en enfoques restaurativos de los operadores del sistema penal juvenil, la persistencia de rasgos inquisitivos en el abordaje penal y la ausencia de previsiones legales y protocolos efectivos son las condiciones más usuales que limitan la utilización de medidas alternativas.

A pesar de estas complejidades y resistencias, el relevamiento también ha identificado algunas iniciativas prometedoras para la implementación de medidas alternativas al proceso penal. El estudio propone una serie de recomendaciones en busca de promover su fortalecimiento y aceptación como formas legítimas de gestión de la conflictividad sociopenal adolescente.

El informe se encuentra organizado en cuatro capítulos. En el primero se presenta el marco conceptual utilizado para guiar el

análisis y se realiza una revisión de la literatura sobre los principales resultados de la justicia restaurativa y sobre las dimensiones que facilitan y que obstaculizan su implementación. En el segundo capítulo se presentan las características del estudio y el diseño metodológico. En el tercer capítulo se describen los resultados del análisis para las jurisdicciones estudiadas (contexto normativo, estructura judicial, criterios de uso y dispositivos para implementación de medidas alternativas, existencia y organización de recursos interdisciplinarios, y buenas prácticas en justicia restaurativa y abordaje interdisciplinario). En el último, se presentan algunas observaciones finales.



Obstáculos y recomendaciones

El marco de análisis propuesto y el relevamiento realizado en las seis jurisdicciones de la República Argentina permitieron realizar un diagnóstico sobre la implementación de los principios de la justicia restaurativa en la justicia penal juvenil. A continuación, se detallan las principales observaciones y algunas recomendaciones correspondientes para su superación.

Observación 1

En varias jurisdicciones, especialmente en las que persiste un sistema inquisitivo tutelar, la mayoría de las medidas socioeducativas que se imponen al adolescente infractor no desjudicializan la respuesta al delito ni incorporan principios restaurativos acorde a la normativa internacional en la materia.

- a. Los actores centrales —fiscales, defensores y magistrados— suelen mostrar reparos filosóficos y técnicos en la implementación temprana de enfoques restaurativos de resolución del conflicto penal. Muchos defensores consideran que las prácticas restaurativas pueden vulnerar el principio de inocencia o dificultar la defensa técnica.
- b. Hay una escasez de previsiones legales y protocolos efectivos que indiquen los casos y las causas en las que deben utilizarse medidas desjudicializadoras y

mecanismos restaurativos como primera respuesta al delito. Esto hace que los criterios de uso dependan de posibilidades y decisiones de los actores individuales.

- c. En los casos que existe consenso ideológico sobre la conveniencia de las medidas restaurativas se suele advertir cierto desconocimiento o falta de formación para efectivizar su aplicación.

Recomendación 1

Realizar seminarios dirigidos a fiscalías, defensorías y magistrados (que incluyan a actores interinstitucionales y a organizaciones de derechos humanos) para aumentar el conocimiento sobre enfoques restaurativos y medidas de desjudicialización.

Recomendación 2

Crear (o potenciar) mesas de trabajo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para el desarrollo de intervenciones tendientes a la desjudicialización. Estas mesas deben buscar mejorar la coordinación del trabajo de los equipos, aumentar la confianza entre actores (especialmente entre poderes), establecer —códigos y lenguajes comunes— y permitir la resolución y seguimiento de casos de forma colegiada.

Recomendación 3

Elaborar pautas de política criminal, reglas y protocolos que identifiquen en qué tipo de delitos y en qué circunstancias es



obligatoria la aplicación de medidas restaurativas como primera respuesta al delito y como medida previa a la apertura de una causa penal. La readecuación de la legislación de las jurisdicciones para que prevean como principal respuesta al delito medidas restaurativas alternativas al proceso y a la pena, facilitaría este proceso. La emisión de acordadas de los Tribunales Superiores y de los Procuradores ordenando la implementación de los protocolos existentes también serviría a este fin.

Observación 2

La organización de las tareas y la distribución de los recursos se basa en un esquema piramidal con foco en la producción de informes para la toma de decisiones por parte de los magistrados. En general, este esquema está concentrado territorialmente en las

principales ciudades de cada jurisdicción y otorga escasa autonomía a los equipos para proponer medidas restaurativas. Además, cuenta con un limitado desarrollo de mecanismos de gestión.

- a. La falta de autonomía técnica de los equipos interdisciplinarios limita la consolidación de las medidas alternativas como opción de intervención. En la mayoría de los casos, las iniciativas restaurativas se deben a decisiones individuales de agentes comprometidos, que funcionan como «activistas».
- b. El lugar central que tiene la realización de informes para la causa demandados por los magistrados, limitan las posibilidades de trabajo interdisciplinario y propician la multidisciplina. Las tareas que persisten son principalmente periciales y de vigilancia territorial.
- c. La carencia de canales institucionalizados de comunicación y coordinación entre los fiscales, defensores y jueces dificulta la viabilidad de medidas que desjudicialicen los conflictos.
- d. La concentración territorial de los recursos contribuye a mantener la tarea de producción de informes como la forma más viable de intervención, sobre todo en localidades alejadas de los centros urbanos. La concentración territorial también limita la especialización de los equipos técnicos, ya que en muchas localidades periféricas deben usarse recursos del sistema de adultos.



- e. Los dispositivos específicos existentes para la aplicación de medidas alternativas y enfoques restaurativos suelen ver menguada su efectividad y eficiencia debido a razones operativas (escasez de personal o de infraestructura).
- f. La falta de estadísticas y procesos de monitoreo —y, cuando existen, su deficitaria integralidad y unificación— no permite medir impactos de las medidas alternativas al proceso y a la privación de libertad. Esto impide desarrollar políticas públicas basadas en evidencia y verificar y comunicar el impacto de los enfoques restaurativos acorde a los derechos humanos.

Recomendación 1

Mejorar la autonomía técnica de los equipos interdisciplinarios mediante, por ejemplo, la modificación de su dependencia, su

jerarquía o sus funciones. Minimizar la superposición y multiplicación de funciones (entre equipos de distintos Poderes), definiendo de manera coordinada objetivos restaurativos y desjudicializadores.

Recomendación 2

Desarrollar ateneos, supervisiones grupales y acciones colectivas que permitan el uso de perspectivas interdisciplinarias, incluso en la realización de los informes.

Recomendación 3

Establecer canales de comunicación de acuerdos, seguimiento de casos y desarrollo de medidas alternativas en general.

Recomendación 4

Mejorar la accesibilidad al sistema y la igualdad ante la ley mediante: a) la distribución equitativa de los recursos en el territorio (estable o transitoria), al llegar a localidades alejadas de los grandes centros urbanos; b) la provisión de mecanismos locales eficaces de «boca de entrada» que sean acordes a derechos, a través de, por ejemplo, la formación específica de agentes policiales.

Recomendación 5

Generar sistemas unificados de registro en los distintos dispositivos que actúan en materia penal juvenil, ya sea de dependencia judicial o administrativa. Integrar las unidades de análisis y las dimensiones de seguimiento y monitoreo para producir informes de impacto periódicos, con los debidos resguardos de las identidades de NNyA infractores.

Observación 3

En muchos de los casos analizados, persisten modelos de intervención en materia penal juvenil que conciben la desjudicialización como ausencia de intervención y presuponen la «propiedad judicial» (y no social) del conflicto.

- a. Cuando se utilizan, la mediación y otras estrategias restaurativas, se aplican mayormente a casos leves y primeros delitos. Las concepciones más tradicionales sobre el delito y el castigo dificultan que las medidas alternativas constituyan una opción válida.

- b. El trabajo territorial está orientado principalmente a la elaboración de diagnósticos de recursos. En la mayoría de las jurisdicciones, el escaso o nulo trabajo territorial de parte de los equipos interdisciplinarios auxiliares de la justicia se fundamenta en su falta de especialidad en materia juvenil.

- c. Escasa participación de la víctima, la familia y la comunidad en los procesos judiciales.

Recomendación 1

Realizar capacitaciones interinstitucionales orientadas a: a) desarrollar herramientas para operacionalizar y reorientar el sentido de la responsabilización (desde un modelo de comprensión terapéutica hacia acciones prácticas vinculadas con la reparación, el perdón y la restitución de los lazos sociales); b) establecer objetivos de intervención vinculados con el conflicto penal antes que con las trayectorias de vida de NNyA; c) fortalecer el trabajo territorial orientado a la intervención comunitaria y la incorporación de las víctimas.

Recomendación 2

Establecer los tipos de causas que deben ser remitidas a instancias desjudicializadoras, garantizando la adecuación a la legislación penal para mejorar el acceso igualitario a la justicia.

Recomendación 3

Promover la generación de espacios de escucha y diálogo con las víctimas y con todas las partes afectadas con motivo del delito en la comunidad, coordinados por operadores especializados.

La justicia restaurativa y la interdisciplina



1.1.	La doctrina internacional de derechos humanos y la justicia penal juvenil	15 Pág.
1.2.	Medidas alternativas al proceso y a la privación de libertad	18 Pág.
1.3.	La justicia restaurativa	22 Pág.
1.4.	La interdisciplina	26 Pág.
1.5.	Impacto del enfoque restaurativo y la perspectiva interdisciplinaria	29 Pág.
1.6.	Dimensiones facilitadoras para la adopción de estrategias restaurativas	31 Pág.
1.7.	Obstáculos, debilidades y problemas	33 Pág.

La doctrina internacional de derechos humanos y la justicia penal juvenil

El marco internacional de derechos humanos para la administración de justicia penal juvenil se encuentra establecido en una importante cantidad de normas y jurisprudencia. La Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración judicial para adolescentes (Reglas de Beijing, Res. 40/33, 29/11/1985), las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de La Habana, Res. 45/133, 14/12/1990), las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad, Res. 45/112 AG, 14/12/1990), las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio, Res. 45/110, 14/12/1990) y la Observación General N.º 24 de setiembre de 2019 del Comité sobre los Derechos del

Niño son los instrumentos jurídicos que establecen los principios mínimos de cualquier sistema de responsabilidad penal juvenil.

Específicamente, en relación con el enfoque de justicia restaurativa, las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño 12 y 14/13, la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa a la materia —Opinión Consultiva N.º 17/2002, párrafo 135 (medios alternativos)— y la Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa, impulsada y aprobada por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), promueven el uso de métodos alternativos a los procesos judiciales y de penas sustitutivas a la privación de libertad y el desarrollo de intervenciones interdisciplinarias como elementos esenciales del

[...] la mínima intervención penal, el enfoque restaurativo y la utilización de la interdisciplina, constituyen principios centrales en el abordaje de la conflictividad penal juvenil, los cuales deben conjugarse para que la finalidad de la intervención judicial sea educativa y conduzca a la inserción social de los adolescentes.

sistema penal juvenil. A su vez, el objetivo dieciséis «Paz, justicia e instituciones sólidas», de los Objetivos de Desarrollo Sostenible persigue el fortalecimiento del Estado de derecho y la promoción de los derechos humanos, así como la búsqueda de soluciones duraderas a los conflictos y la inseguridad.

De este modo, la mínima intervención penal, el enfoque restaurativo y la utilización de la interdisciplina, constituyen principios centrales en el abordaje de la conflictividad penal juvenil, los cuales deben conjugarse para que la finalidad de la intervención judicial sea educativa y conduzca a la inserción social de los adolescentes.

La justicia penal juvenil no solo debe ser especializada, distinta a la de los adultos, sino que además debe basarse en: a) la consideración del derecho penal como última opción, lo que permite fijar una edad mínima de responsabilidad juvenil que no descienda una vez establecida y prohibir la coerción penal por debajo de dicha edad; b) la implementación de un modelo acusatorio con garantías penales básicas, en especial la comprobación de la culpabilidad,





la carga de la prueba en la fiscalía y el derecho a la defensa; y c) la limitación de las penas mediante medidas socioeducativas alternativas a la privación de libertad y mecanismos que permitan la reducción del monto de las penas privativas de libertad a una fracción del establecido para los adultos (Ferrajoli, 1994).

El principio de desjudicialización es una dimensión central de la justicia adaptada a NNyA. Supone la posibilidad de que el Estado permita soluciones por fuera del proceso judicial tradicional que eviten o limiten la sanción penal. Para materializar ese principio, es necesaria la disponibilidad y aplicación de medidas alternativas al proceso y al juicio, que aparten al

joven del sistema de justicia penal y eviten la necesidad de recurrir a procedimientos judiciales, siempre en el marco del pleno respeto de los derechos humanos y las garantías legales. Asimismo, las medidas alternativas reconocen la existencia de conflictos sociales y buscan la reducción de la violencia estatal para su tratamiento, propiciando la pacificación del conflicto mediante respuestas satisfactorias a las víctimas y a los imputados.

Medidas alternativas al proceso y a la privación de libertad

1.2.1.

Las medidas alternativas al proceso penal juvenil son un conjunto de procedimientos que buscan atender a jóvenes en conflicto con la ley penal con el fin de restablecer el orden social afectado por el delito, sin recurrir a un proceso judicial tradicional. Estas medidas pueden desarrollarse de manera alternativa al juicio penal o dentro del mismo (Beloff, 2005). Algunos ejemplos de medidas alternativas al proceso son:





Principio de oportunidad procesal

Es una atribución del fiscal, quien —como titular de la acción pública y en función de una serie de requisitos como tipo de delito, gravedad del hecho, características del involucrado y su entorno— cierra la actuación comenzada por la Policía y prescinde de la persecución penal o realiza un desistimiento de la acción penal y la causa se archiva¹.



Remisión

Es una figura jurídica que implica la derivación del caso al área de Protección de Derechos a cargo del Poder Ejecutivo (por ejemplo, se incorpora al joven a un programa especializado de un ministerio), luego del sobreseimiento o el paso a instancias restaurativas. Es un recurso que el fiscal, o quien tenga a cargo la instrucción, ordena, usualmente al inicio de la investigación, por razones similares a las de utilización del principio de oportunidad. Excepcionalmente, puede ser requerida por el juez, incluso en la instancia del juicio. Se suele utilizar en la tramitación de causas de delitos leves y muy leves.

1. Junto al principio de oportunidad existen una serie de modalidades de cese de la acción penal. Estas no se encuentran estrictamente amparadas en el criterio de oportunidad, aunque una interpretación extensiva del mismo podría incluirlas. Tampoco son una remisiones ni medidas alternativas en un sentido riguroso. Se trata de modalidades por las cuales los conflictos y los adolescentes terminarán siendo desjudicializados mediante una prescripción que extingue la acción penal y pasa a archivo.



Probation o suspensión del juicio a prueba

Es una medida por la que el acusado de la comisión de un delito se somete de manera voluntaria, durante un plazo determinado al cumplimiento de pautas de conducta —como reparación del daño, medidas socioeducativas, indicación de tratamiento, acuerdos de comportamiento, entre otras, a cuyo término se declarará extinguida la acción penal y cesará toda responsabilidad penal. Si este no cumple con las pautas, el juez tiene la facultad de revocar la *probation* y de reiniciar la persecución penal que se había suspendido. Al estar generalmente previsto en los códigos procesales penales, el plazo durante el que se suspende la acción penal contra un joven depende del fijado para los adultos. A su vez, esta medida es utilizada como alternativa a la privación de libertad.



En paralelo a estas medidas existen otras que se vinculan con la justicia restaurativa, que pueden denominarse «medidas reparatorias», como la mediación, la conciliación y la reparación del daño (ver punto 1.4).

2. Puntualmente, el Código Penal Argentino habilita que se implemente la *probation* «sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente». Esto se admite en la mayoría de las jurisdicciones y es el tipo de medida más utilizada en el país.



1.2.2.

Las medidas alternativas a la privación de libertad son una serie de recursos a disposición del Poder Judicial que buscan hacer de la privación de libertad, ambulatoria, una medida de uso excepcional y de último recurso para así favorecer el desarrollo personal de NNyA.

Estas medidas han sido clasificadas en dos grandes grupos: las medidas cautelares —que se aplican durante el proceso y sustituyen a la prisión preventiva— y las sanciones alternativas —que procuran que el reproche penal se exprese de un modo diferente al encierro—. En este tipo de medidas, los jóvenes son puestos por el juez bajo la supervisión de agentes o incorporados a programas, del tipo de

supervisión en territorio, que reportan de manera periódica al Poder Judicial.

En algunos casos, estas medidas también se utilizan también como formas de suspender el proceso judicial antes del dictado de la sentencia. Para ello, se tienen en cuenta tanto las características o la gravedad del delito como los resultados del programa o plan de acción durante el período de libertad vigilada.

La justicia restaurativa

Los principios enumerados hasta aquí son recogidos en los procesos y medidas restaurativas. En términos amplios, se define la justicia restaurativa como un proceso en el que todas las partes implicadas en un conflicto —ofensor, víctima y comunidad— resuelven de manera colectiva cómo manejar las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro (Unicef, 2018). La justicia restaurativa es entendida como «una respuesta evolucionada al crimen, que respeta la dignidad y equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de la víctima, del infractor y de la comunidad» (UNODC, 2006).

Este es un enfoque de pensamiento alternativo, tanto para abordar el delito como para considerar a los sujetos involucrados, que busca reparar las relaciones dañadas. El enfoque parte de comprender a los individuos como seres autónomos con capacidad para resolver pacífica y eficazmente el conflicto.

Además, define el crimen en términos relacionales, interpretándolo como ruptura y daño del lazo social. La justicia restaurativa

señala la importancia de atender a la capacidad y responsabilidad del agresor en la acción que generó el conflicto, así como a las expectativas de reparación del daño sufrido por parte de la víctima y la comunidad. Asimismo, establece espacios de diálogo grupales en los que prima la escucha y se permite a las víctimas, o a los ofendidos por el ilícito penal, expresarse para que su opinión y sus necesidades sean tenidas en cuenta. La filosofía de este modelo presenta una visión compleja del conflicto, en la que tienen lugar una serie de restauraciones que se resumen en las «tres R»: responsabilidad, restauración y reintegración. De este modo, la justicia restaurativa posibilita formas ágiles y participativas de resolución de conflictos y puede mejorar el acceso a la justicia.

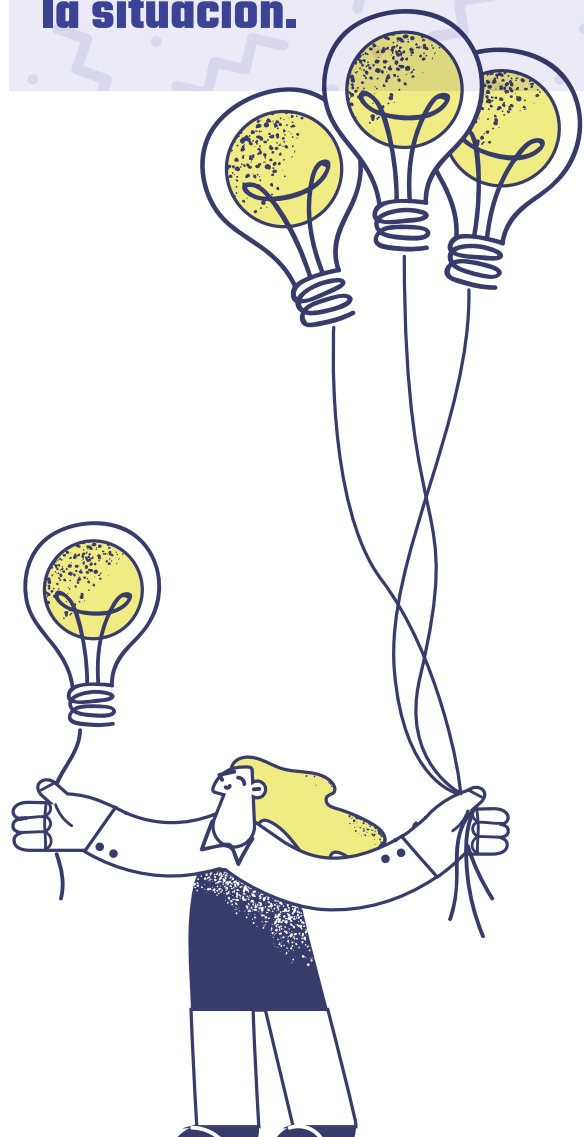
Las estrategias restaurativas más habituales son la mediación, las conferencias de conciliación y los círculos restaurativos.

- La mediación es definida como una «solución extrajudicial alternativa al proceso penal, con un importante potencial educativo en el marco de la cual, víctima y autor del delito, con la participación de

un facilitador/mediador capacitado, se implican en la búsqueda de soluciones en el conflicto que los enfrenta como consecuencia del hecho delictivo, devolviendo el protagonismo a las partes para que sean ellos quienes decidan la forma en que quieren reparar y ser reparados» —Protocolo de Mediación Penal Juvenil Restaurativa y Acuerdos Restaurativos, Resolución N.º 813/2018, en adelante (PMP)—. A la vez, puede evitar el ingreso al sistema judicial, ya que su campo de aplicación excede el ámbito de la justicia. Puede usarse en cualquier momento del proceso (en el juicio, antes o después de la sentencia). Cuando tiene lugar antes de la sentencia, su resultado normalmente regresa al fiscal o al juez para su consideración. También puede desarrollarse durante la privación de libertad del joven y ser parte de su proceso de reintegración social, aun en los casos de jóvenes con sentencias largas.

Normalmente, la mediación se desarrolla con la ayuda de un mediador —una persona especialmente capacitada—. Las partes expresan sus sentimientos para intentar desarrollar un nuevo entendimiento de la situación. El mediador se reúne con ambas partes antes del encuentro cara a cara y puede ayudarlas a prepararse para ese evento, en pos de evitar exponerlas (ya sea, revictimizando al ofendido o estigmatizando al joven infractor). También puede haber procesos de mediación indirectos en los que el mediador se reúne con las partes de manera sucesiva y por separado.

Normalmente, la mediación se desarrolla con la ayuda de un mediador —una persona especialmente capacitada—. Las partes expresan sus sentimientos para intentar desarrollar un nuevo entendimiento de la situación.



Los principios que rigen la mediación son la voluntariedad (ambas partes deben estar dispuestas a participar y tienen la libertad de concurrir o no, de permanecer o no, de alcanzar o no un acuerdo); la *confidencialidad* (el compromiso de mantener reserva acerca de lo que se hable en ese ámbito, así como de la documentación de la que allí se tome conocimiento); la *informalidad* (se evitan estructuras rígidas como las de los procesos judiciales); la *cooperación* (se propicia que las partes actúen de manera colaborativa), el acento puesto en el futuro y en la resolución del conflicto; la autocomposición (el mediador se debe focalizar solo en la conducción del proceso) y la *neutralidad* del mediador, quien debe abstenerse de preferencias y prejuicios y de proponer soluciones. Dado que la intervención apunta a la búsqueda de soluciones para resolver el conflicto, es un ejercicio que requiere el restablecimiento del vínculo entre las partes y con la comunidad, por eso se espera que tenga un carácter ampliamente restaurativo, más allá de la reparación del daño puntual vinculado al delito. De acuerdo al PMP, es necesario que la reparación no sea solo económica sino que contenga también contenido pedagógico, y a la vez, que la comunidad esté presente de alguna manera.

- Las conferencias de conciliación son reuniones de participación voluntaria que incluyen a la víctima, al ofensor, a diferentes miembros de la comunidad y a profesionales. Es fundamental que en

el encuentro estén presentes actores significativos para ambas partes y de la comunidad. Incluso, en ausencia de la víctima, otras personas de la comunidad pueden ocupar su rol. Además, está previsto que participen abogados, psicólogos, trabajadores sociales que hayan estado en contacto con el caso y otros actores que puedan contribuir al proceso como maestros, actores comunitarios, amigos del ofensor, referentes familiares de la víctima y del adolescente infractor, etcétera. Cabe aclarar que la conferencia de conciliación puede terminar con una recomendación de privación de libertad.

- Por su parte, los círculos (restaurativos, comunicativos, sentenciadores)³ consisten en reuniones en las que todos los participantes se ponen en ronda para favorecer el intercambio y la ausencia de jerarquías, la empatía y la comprensión del otro en la resolución del conflicto. Son una forma de intervención basada en la reparación y el aprendizaje a través de un proceso de participación y toma de decisiones de manera grupal y colectiva. Se caracterizan por reducir los comportamientos o relaciones violentas de los participantes, restaurar las relaciones humanas y reparar el daño.

3. Círculos de soporte para victimarios y «cárceles sin rejas ni armas», reguladas por los propios presos y la comunidad. El modelo surgió en Brasil en 1972 y actualmente hay veinticuatro países que tienen cárceles de estas características. Para más información, visitar: <https://www.ibj.org/2009/08/apac-associação-de-proteção-e-assistência-aos-condenados-an-alternative-vision-for-prisoners-from-brazil/>.

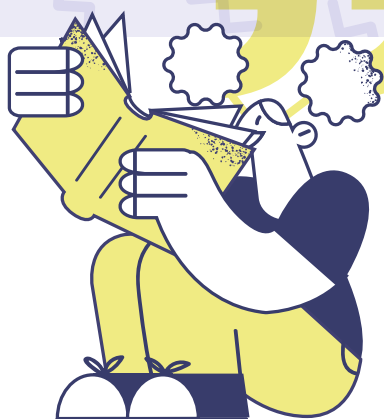


En todos los tipos de estrategias restaurativas, se prevé que la conclusión del proceso se plasme en algún tipo de acuerdo entre las partes (presentes o representadas), y se establece el supuesto de la «responsabilidad subjetiva» por el daño —a diferencia de la «responsabilidad penal» por el delito— como parte de los objetivos educativos de la justicia penal juvenil. La literatura muestra consenso en que la justicia restaurativa puede aplicarse a delitos leves y graves, y ha demostrado ser especialmente efectiva en los segundos, en los que la reparación es mucho más necesaria para la víctima, aunque existen opiniones controversiales respecto a los delitos contra la integridad sexual (ONU, 2006; Domingo de la Fuente,

2018 y Burgos, 2018). Si bien se pueden implementar en cualquier instancia del proceso judicial (investigación, juicio o ejecución de la pena) —y esto varía según las reglamentaciones de cada país—, hay acuerdo en que es preferible implementar las prácticas restaurativas al inicio del proceso judicial. Asimismo, los resultados de las prácticas de justicia restaurativa pueden ser o no vinculantes a la resolución penal. Ello también varía según la normativa de cada país y el nivel de legitimidad que posea la justicia restaurativa dentro de los sistemas de justicia.

14 La interdisciplina

La interdisciplina es una herramienta para revertir la fragmentación de la intervención socio-penal, ya que el trabajo interdisciplinario permite integrar toda la información sobre el adolescente y buscar soluciones y oportunidades a partir de la articulación de las intervenciones de cada disciplina.



El enfoque de derechos en la política penal juvenil se enfoca no solo en la respuesta al delito, sino también en la ampliación y restitución de derechos de las personas y los grupos para quienes se desarrolla, recuperando las necesidades y problemas de los destinatarios. La sanción penal debe tener una finalidad educativa y de inserción social y propiciar que el adolescente repare el daño causado, realice actividades comunitarias o se capacite profesionalmente. Para lograr estos objetivos, es necesario que la justicia juvenil cuente con recursos institucionales que posibiliten el desarrollo de una intervención interdisciplinaria que promueva el diálogo, la transformación subjetiva y la reinserción antes que la punición, el estigma y el castigo (Beloff, 2018).

La interdisciplina es una herramienta para revertir la fragmentación de la intervención sociopenal, ya que el trabajo interdisciplinario permite integrar toda la información sobre el adolescente y buscar soluciones y oportunidades a partir de la articulación de las intervenciones de cada disciplina (TDH, 2015). Un enfoque interdisciplinario



posibilita diseñar abordajes que propician el diálogo, la transformación subjetiva y la re-inserción social de los jóvenes por sobre la estigmatización y el punitivismo. Además, se diferencia de la multidisciplina, ya que no se orienta exclusivamente a suministrar evaluaciones sobre el riesgo o la peligrosidad del adolescente, para que el juez decida el tipo de tratamiento tutelar a adoptar. En lugar de ello, uno de los principales desafíos y preocupaciones de la interdisciplina en el ámbito penal juvenil radica en la capacidad de crear «interconexiones, vínculos o enlaces que potencien reflexiva e intencionadamente las sinergias, pero que a su vez respeten la sustantividad de cada una de las disciplinas. Implica construir un sentido

de dirección estratégica, sus mecanismos de concreción y una estructura tal que permita, paralelamente, la interdependencia y la autonomía» (Marín González, 2002: 25).

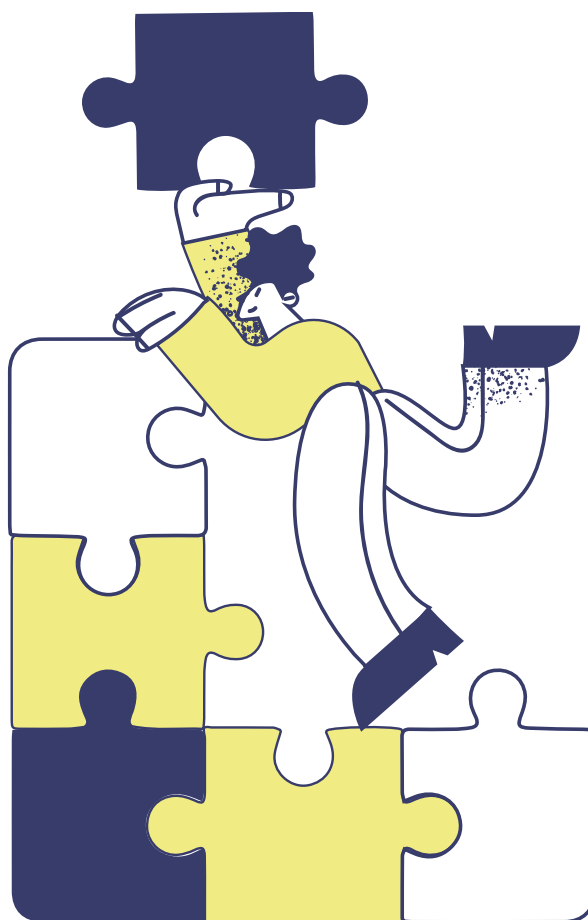
El desarrollo de enfoques interdisciplinarios que contribuyan a la transformación de las prácticas tradicionales del Poder Judicial, que promuevan la interacción entre las visiones de las distintas disciplinas, que eviten el desarrollo de acciones aisladas y segmentadas y que propicien nuevos modos de abordar los conflictos penales juveniles, es parte de la discusión contemporánea y el propio interés de los profesionales. A su vez, el trabajo interdisciplinario permite la integración de la información y la articulación de las intervenciones, haciendo más eficiente la búsqueda de soluciones (TDH, 2015).

La normativa internacional de derechos humanos considera a la interdisciplina como una herramienta relevante para reponer la integralidad del sujeto de derechos y superar la fragmentación. Así, las Directrices de Riad plantean que los planes y programas de prevención del delito deberán incorporar una metodología interdisciplinaria. Del mismo modo, las Reglas de Beijing (reglas 16 y 22) dan cuenta de la importancia del aporte interdisciplinario en la investigación y la necesidad de contar con personal especializado y capacitado. Por su parte, las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad establecen que los centros de atención y detención tienen que estar compuestos por profesionales de varias disciplinas (regla 81). Finalmente, y específicamente en Argentina, el Comité de los Derechos del Niño señaló, en su Comentario General N.º 24 de 2019, que la incorporación de la interdisciplinariedad es apropiada para la intervención temprana en el sistema penal juvenil, ya que alienta la implementación de modelos restaurativos⁴.

4. En la República Argentina, el Protocolo de Mediación Penal Juvenil Restaurativa y Acuerdos Restaurativos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Resolución N.º 813/2018) promueve el trabajo interdisciplinario como base de los modelos restaurativos en la justicia penal juvenil. El mismo es entendido como trabajo de comediación y de facilitadores no mediadores, desarrollado por equipos interdisciplinarios con autonomía técnica, quienes deben estar capacitados en justicia restaurativa, mediación penal juvenil, derecho internacional de los derechos humanos, aspectos psicológicos, educacionales y socio-culturales de la infancia. Además, deben trabajar de manera articulada y en red con otros organismos estatales judiciales, policiales o de la sociedad civil, promover la participación voluntaria de víctimas y de representantes de la comunidad, y de referentes de las partes. Esto con el objetivo de buscar reducir los impactos relativos a la estigmatización y la victimización de los protagonistas dentro de un espacio humanizado y lograr un acuerdo flexible, creativo, acorde con las expectativas y emociones de víctima, victimario y la comunidad presente.

En suma, los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos apuntan a que los sistemas penales juveniles propicien la inclusión e implementación de medidas alternativas al proceso y a la pena, y fomenten la participación de las víctimas y de la comunidad en el tratamiento del delito adolescente. En tal sentido, la incorporación de la interdisciplina en los procesos judiciales deviene central, ya que el objetivo es propiciar la capacidad de escucha, la desestigmatización de los jóvenes y promover su inserción social.

En el siguiente apartado se presenta una revisión de la literatura que sistematiza el impacto y los resultados de la implementación de abordajes interdisciplinarios con enfoque restaurativo en materia penal juvenil.



Impacto del enfoque restaurativo y la perspectiva interdisciplinaria

Las investigaciones desarrolladas en diferentes países muestran que los programas con enfoques restaurativos en justicia penal juvenil pueden lograr la reducción de la reiterancia (ONU, 2006; Bonta *et al.*, 2006). Así, cuando los jóvenes expresan arrepentimiento y cuando atraviesan un consenso genuino, los segundos delitos son menos probables. Una menor reiterancia también se observa cuando delincuentes jóvenes no son avergonzados ni estigmatizados; cuando están involucrados en la toma de decisiones, cumplen con los acuerdos, se reúnen, piden disculpas a las víctimas y sienten que han reparado el daño (ONU, 2006: 85).

La investigación sobre reiterancia después de una intervención restaurativa muestra que los mejores predictores de segundos delitos son características de la población seleccionada y no de los programas, por ejemplo edad, edad en la primera ofensa, género y delitos previos. Así, los hombres

son más propensos a reincidir que las mujeres y cuando los jóvenes empiezan con los delitos a una edad temprana, la reincidencia es más probable (ONU, 2006). Ello se vincula con estructuras de desigualdad social, como el género y la generación. Así, estereotipos sobre la masculinidad serán fuertes determinantes de la necesidad de proveer económicamente por cualquier medio, o de la necesidad de resolver conflictos de manera violenta. Sin embargo, hay evidencia preliminar de que los procesos restaurativos pueden reducir la frecuencia y la severidad de la segunda ofensa (Haynes, 2005).

Las conferencias de justicia restaurativa juvenil pueden reducir la reincidencia entre los jóvenes acusados de delitos relativamente graves, por lo que pueden ser una alternativa eficaz a las prácticas tradicionales de justicia penal. Una evaluación experimental del programa *Make-it-Right* en San Francisco, California, encontró que re-

duce la probabilidad de un nuevo arresto de los jóvenes participantes dentro de los primeros seis meses en 19 puntos porcentuales, que significa una reducción del 44 por ciento en relación con el grupo de control. Además, encontró que la reducción de la reincidencia persiste incluso cuatro años después (Shem-Tov *et al.*, 2021).

La implementación de encuentros cara a cara entre ofensor y víctima incide en el cambio de percepción sobre el infractor y propicia una mirada más comprensiva y menos vengativa hacia los jóvenes ofensores (Bolívar, 2011). A su vez, puede tener efectos en la «disminución de la violencia interpersonal o la justicia por mano propia» (Medan, 2016: 20). Por otra parte, Latimer *et al.* (2005) y Sherman y Strang (2007) dan cuenta de que las víctimas se sienten más satisfechas en este tipo de estrategias que en el sistema de justicia tradicional (McCold, 2003) y señalan sentirse menos temerosas después de haberse reunido con el joven ofensor en un contexto de mediación. Tanto las víctimas como los jóvenes infractores evalúan los procesos restaurativos como más justos y satisfactorios que el sistema de justicia penal convencional.

Otra afirmación que realizan los autores, es que muchas víctimas y jóvenes participarían en un proceso restaurativo si se les diera la oportunidad de hacerlo.

Los procesos de justicia restaurativa pueden incrementar el compromiso con la comunidad y facilitar el involucramiento de sus integrantes en las respuestas y en la resolución de problemas a la criminalidad. Las metodologías de «círculos», prácticas restaurativas en las que participan, además de la víctima y el victimario, familiares y representantes de la comunidad, con una dinámica de diálogo (Choya Forés, 2015), son respetuosas de tradiciones culturales. A su vez, cuando se forman adecuadamente, los voluntarios comunitarios pueden ser tan efectivos en facilitar procesos restaurativos como los profesionales de la justicia penal (ONU, 2006).

En algunas jurisdicciones, las metodologías restaurativas han reducido costos de juicio y tiempo de procesos y mejorado los servicios de justicia (Miers y Willemsens, 2004). A su vez, la efectividad de los procesos de justicia restaurativa se incrementa cuando las agencias y los programas trabajan en conjunto dentro de un marco de trabajo colaborativo (ONU, 2006).



Dimensiones facilitadoras para la adopción de estrategias restaurativas

La implementación de modelos alternativos de justicia requiere de contextos sociales y capacidades institucionales facilitadoras. Las capacidades institucionales pueden definirse como la habilidad del Estado de formular políticas e implementar decisiones con una adecuada relación de costoefectividad y calidad (Rodríguez Gustá, 2008).

Los contextos facilitadores para el desarrollo de procesos restaurativos tienen como características más importantes el consenso ideológico entre quienes promueven las transformaciones y la apertura a reformas y cambios por parte de actores institucionales y políticos relevantes.

Al nivel de la institucionalidad, los marcos de procedimientos de justicia restaurativa deben ajustarse a los criterios penales en cuanto

a una serie de factores tales como la selección de casos adecuados y el mantenimiento de criterios de legalidad y garantías procesales, entre otros. Es de central importancia que tanto el Poder Judicial se avenga a derivar los casos —porque está previsto en la normativa, porque hay acuerdo político o porque se cuenta con los dispositivos, mecanismos y procedimientos— como que los programas busquen activamente propiciar las remisiones, en especial en los primeros momentos de implementación, tanto por parte de las fiscalías y defensorías como por parte de la Policía. La retroalimentación y comunicación de los resultados desde los programas restaurativos a las demás áreas del sistema penal y la previsión de procesos de apoyo y seguimiento del cumplimiento de los acuerdos es una característica de gran relevancia para la consolidación de la preferencia por

los mecanismos restaurativos. Finalmente, el desarrollo de planes sólidos de comunicación comunitaria es una característica de programas exitosos (ONU, 2006).

El desarrollo de sistemas de calidad de gestión institucional se vuelve fundamental para la adopción de estrategias restaurativas. Así, los protocolos de actuación con sistemas de información y de indicadores de seguimiento, las formas de rendición de cuentas y auditabilidad, los procedimientos de queja para uso de NNyA infractores, las garantías de acceso a la información adecuada para NNyA, etcétera, son prácticas que desarrollaron algunas experiencias exitosas y sostenibles (Unicef, 2018).

En lo relativo a los marcos conceptuales y modelos de trabajo, los estudios señalan que resulta sumamente importante contar con una amplia variedad de medidas que permitan la flexibilidad de las recomendaciones para adaptarse a las necesidades de NNyA

infractores y que puedan ser utilizadas en los distintos momentos del proceso. El desarrollo de estrategias para la evaluación de la idoneidad de los casos y la implementación de mecanismos de apoyo para el cumplimiento de los acuerdos y su monitoreo son características de relevancia (ONU, 2006).

Los equipos que llevan adelante los programas de resolución restaurativa de conflictos se destacan por la legitimidad social, institucional y comunitaria que poseen. La idoneidad y la capacitación específica son requisitos de relevancia, incluso más que la profesión del agente.

Finalmente, la participación de las personas involucradas, en especial de las víctimas y de los NNyA infractores, conlleva la búsqueda de medidas más positivas y democráticas. Ser parte del diseño de las medidas socioeducativas a cumplir genera una instancia de reflexión y responsabilización a los NNyA, a la vez que puede favorecer que el contenido de las medidas se adecue a las concretas necesidades del caso y de los NNyA.



7 Obstáculos, debilidades y problemas

En cuanto a las debilidades en los contextos y las capacidades institucionales que inciden negativamente en las posibilidades de desarrollo y sostenimiento de las medidas alternativas, es esencial destacar la falta de confianza de los actores del Poder Judicial en las sanciones no privativas de libertad y en las medidas alternativas. La limitada reforma de los códigos procedimentales penales, que casi no permiten dar continuidad a programas y políticas alternativos al proceso y al encierro, es otro de los aspectos que dificultan la implementación y sostenibilidad de las medidas. Los programas que están débilmente institucionalizados, a su vez, se ven afectados por los cambios de gestión y la voluntad política que comprometen desde el presupuesto y la infraestructura hasta el recurso humano (Unicef, 2003 y 2018).

La limitada capacidad para atraer causas es otro aspecto que contribuye al fracaso de programas o dispositivos alternativos,

incluso cuando cuentan con recursos suficientes. Esto sucede sobre todo cuando el criterio utilizado para desjudicializar es el principio de oportunidad (ONU, 2006). La falta de seguimiento y supervisión institucional es una limitación para el incremento de la implementación de medidas alternativas.

La ausencia de sistemas de información e investigación sólidos sobre reiterancia y eficacia de las intervenciones, y de apropiados sistemas de comunicación de sus resultados, contribuyen negativamente a la atracción de los mecanismos alternativos (Killkeny, 2016 y Unicef, 2018). La escasa evaluación de la eficacia de los programas también contribuye negativamente a su implementación (ONU, 2006).

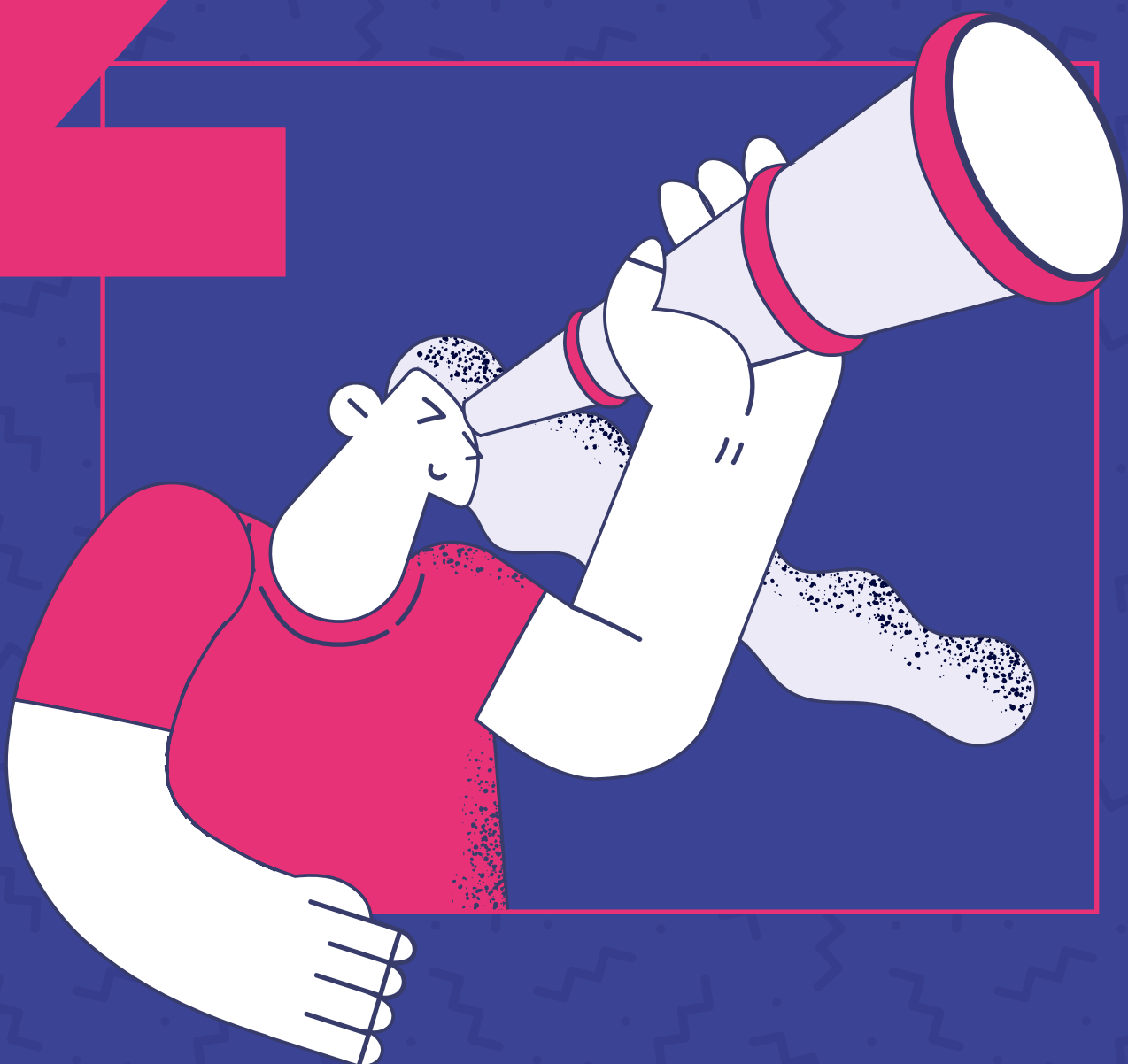
Finalmente, otra debilidad es la limitación en las modalidades de trabajo restaurativo y en la accesibilidad y capacidad de los servicios o programas de apoyo a las víctimas y a las personas que cometieron delitos.

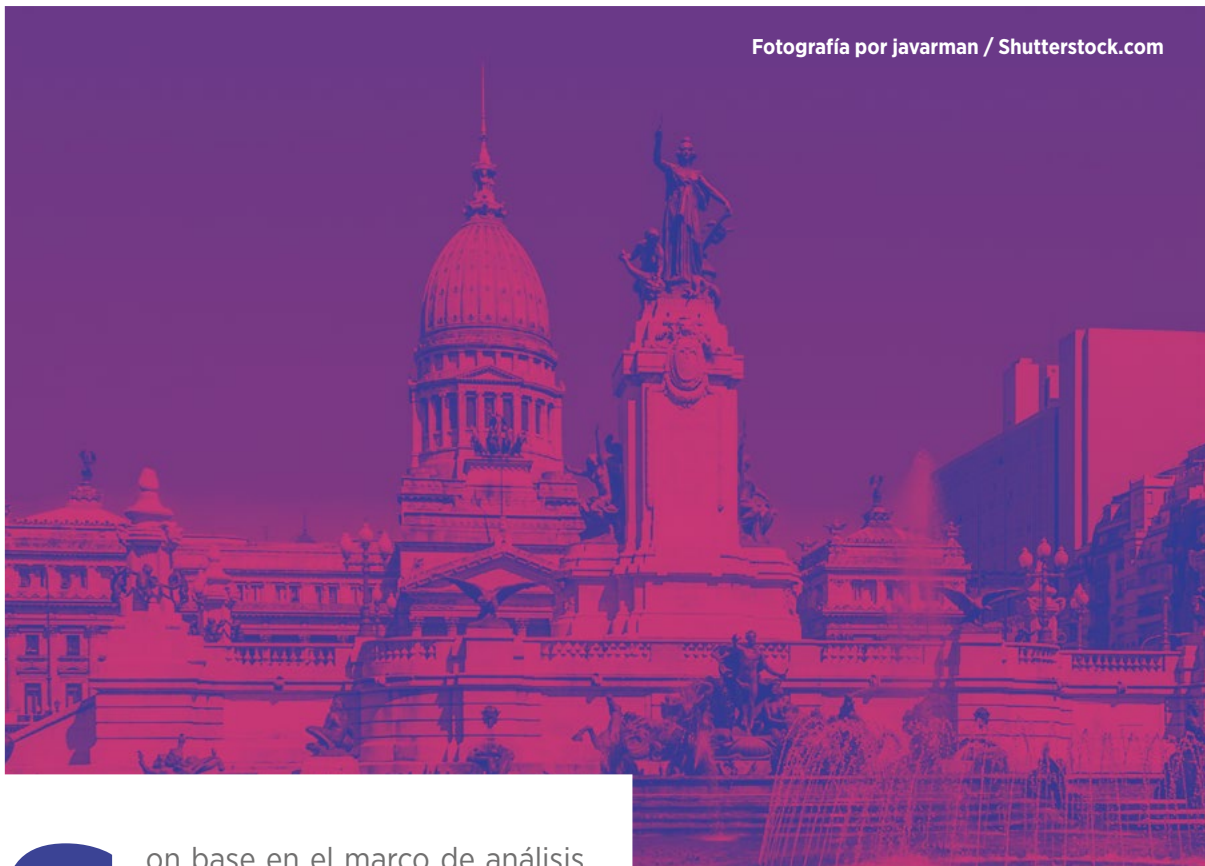
Tabla 1. Síntesis de dimensiones facilitadoras y obstaculizadoras halladas en la literatura

Facilitadores	Obstaculizadores
Contextos sociopolíticos	
Consenso ideológico entre quienes promueven las transformaciones.	Falta de confianza por parte de los principales actores.
Apertura a la reforma por parte de actores institucionales y políticos relevantes.	Limitada reforma de los códigos procesales.
Capacidades burocrático-gerenciales	
Marcos de procedimientos: <ul style="list-style-type: none"> • Selección de casos. • Criterios de legalidad. • Garantías procesales. 	
Propiciar / acordar las remisiones de casos.	Limitación en la capacidad para atraer causas.
Retroalimentación y comunicación de los resultados de las intervenciones.	Ausencia percibida de sistemas de información e investigación sólidos sobre reiterancia y eficacia de las intervenciones.
Implementación de mecanismos de apoyo y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.	Falta de seguimiento y supervisión institucional.
Planes de comunicación comunitaria.	Escasa evaluación de la eficacia.
Capacidades interpretativas y deliberativas	
Participación de los involucrados.	Limitación en las modalidades de trabajo restaurativo.
Sistemas de calidad de gestión institucional.	
Variedad de medidas.	Exclusiva utilización del principio de oportunidad.
Criterios establecidos para la remisión que limiten la discrecionalidad (combinación de principio de oportunidad y principio de legalidad).	
Capacidades administrativas	
Legitimidad de los equipos.	
Idoneidad de los agentes.	

2

Características del estudio y diseño metodológico



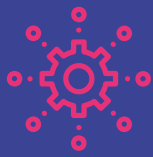


Con base en el marco de análisis presentado en el capítulo anterior, este estudio expone un relevamiento del sistema penal juvenil en las provincias de Buenos Aires (municipios de Lomas de Zamora, San Martín, San Isidro, La Matanza), Santa Fe (municipios de Santa Fe y Rosario), Córdoba (municipios de Córdoba y Río Segundo), Mendoza (Mendoza), Jujuy (San Salvador y San Pedro), Neuquén (Neuquén) y en el Fuero de la Justicia Nacional de Menores (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA) de la República Argentina⁵. El relevamiento se enfoca en los usos y las valoraciones que los distintos actores que componen el sistema penal juvenil realizan de las medidas

alternativas al proceso y a la privación de libertad, así como de la utilización de la interdisciplina para implementarlas.

El relevamiento incluyó la identificación y caracterización de los recursos interdisciplinarios y de sus prácticas típicas. Se orientó para obtener información rigurosa y sistemática sobre las capacidades relacionales (de monitoreo y administrativas) y los modelos de intervención. El objetivo general del estudio fue describir y analizar la existencia y el contenido otorgado a los distintos mecanismos utilizados para la implementación de medidas alternativas al proceso penal y a la pena del sistema penal juvenil, y los usos que se hacen de ellos en seis provincias de Argentina y en el Fuero Nacional de la Justicia de Menores. Para ello, se delinearon los siguientes objetivos específicos:

5. En CABA se incluyó la Dirección General de Responsabilidad Penal del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CDNNyA) en tanto interactúa con los juzgados del Fuero Nacional. Sin embargo, la jurisdicción (esto es, el Poder Judicial local y su fuero penal juvenil) no fue objeto de estudio.



Relevar y sistematizar los diferentes dispositivos y recursos disponibles a nivel jurisdiccional en el sistema penal juvenil (instituciones, programas, personas y acciones del sistema penal juvenil).



Analizar y sistematizar la información sobre la descripción, funciones, cobertura, recursos destinados y sostenibilidad de estos dispositivos, así como las dificultades, retos y desafíos desde la perspectiva de los actores.



Describir y analizar los criterios de utilización y los usos concretos que se hacen de cada uno de los diferentes dispositivos: en qué tipo de situaciones se utiliza cada uno, de qué factores depende su utilización, características de las causas y de los adolescentes en las que son utilizados los dispositivos, entre otras variables.



Identificar las formas en que la interdisciplina es una característica presente en el sistema penal juvenil, a partir de describir las acciones que desarrollan los distintos profesionales y los alcances y limitaciones de sus intervenciones.

6. Para ello, se define como «pertinencia» a la congruencia entre las estrategias desarrolladas, las prioridades en materia penal juvenil y derechos humanos, y los desafíos del contexto socioeconómico y las necesidades/características de la población. Como «eficacia» entendemos la medida o grado en que las acciones logran alcanzar los objetivos diseñados. Como «eficiencia» comprendemos la medida en que los resultados son alcanzados movilizando apropiadas cantidades de recursos e insumos. Finalmente, con criterio de «sostenibilidad» nos referimos a la medida en que las intervenciones puedan mantenerse en el tiempo a partir de fortalecer y desarrollar las capacidades institucionales, incluyendo las de articulación.

Se trató de un estudio de casos múltiples de tipo descriptivo, con fuentes de datos cuali y cuantitativas y procedimientos de análisis cualitativos. La pregunta central que orientó la investigación fue:

¿En qué medida los recursos interdisciplinarios disponibles en cada jurisdicción desarrollan medidas alternativas al proceso y a la privación de libertad pertinentes, eficaces, eficientes y sostenibles?

El abordaje utilizado fue centralmente cualitativo (se le dio prioridad a la realización de entrevistas y recolección de documentación institucional) y se construyeron datos cuantitativos con el objetivo de obtener información sistematizada sobre los recursos disponibles y las dimensiones de los sistemas penales juveniles por jurisdicción. El universo de estudio se concentró en la identificación de dispositivos (tales como organismos, áreas o programas) y recursos interdisciplinarios en el marco del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, su uso y disponibilidad, y la valoración que tienen sobre ellos los diversos actores.

Las fuentes de datos consistieron en entrevistas estructuradas y semiestructuradas,

relevamiento documental y recolección de datos secundarios⁷. Las unidades de observación en las jurisdicciones seleccionadas fueron:

- a. Poder Ejecutivo de nivel provincial y municipal (cuando correspondió): agentes a cargo de áreas, políticas y programas destinados a adolescentes en conflicto con la ley penal (nivel de dirección o coordinación).
- b. Poder Judicial provincial: agentes judiciales (jueces, asesores de juzgado, coordinadores o integrantes de equipos interdisciplinarios).
- c. Ministerio público provincial: agentes fiscales y defensores, y coordinadores o integrantes de equipos interdisciplinarios.
- d. Marcos normativos existentes en las provincias seleccionadas relativos a la justicia penal juvenil.
- e. Documentos institucionales relativos a programas o instituciones existentes para el tratamiento y asistencia a NNyA en conflicto con la ley de las jurisdicciones relevadas.

7. El trabajo de campo se desarrolló entre el 20 de octubre y el 31 de noviembre de 2019 en las jurisdicciones previstas (Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Jujuy, provincia de Buenos Aires y el Fuero Nacional de Menores), en tanto la labor de concertación de la agenda se inició a finales de septiembre. La elección de estas jurisdicciones se fundamenta en que cuentan con un alto índice de NNyA en conflicto con la ley, requieren apoyo para el fortalecimiento del sistema penal juvenil acorde a los estándares de derechos humanos o presentan buenas prácticas desde un enfoque restaurativo. Esto es, proveen de una variabilidad relevante en virtud de las dimensiones de estudio.

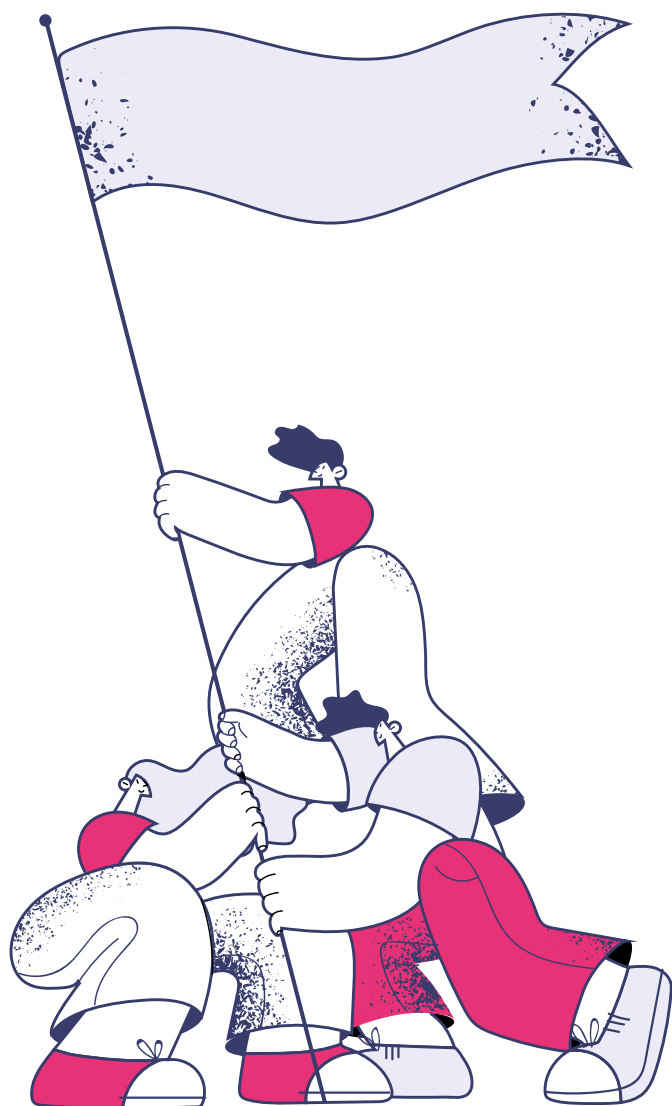
El estudio de estas unidades tuvo la intención de relevar los recursos del sistema, con especial atención en sus funciones, cobertura, criterios de utilización, usos concretos y efectividad. En tal sentido, importa tanto describir los casos que serán incluidos como aquellos que deben ser excluidos para no producir sesgos. De tal modo, el conocimiento o familiaridad de los actores respecto de instrumentos y recursos es un criterio de relevancia teórica para excluir o incluir tales recursos. Asimismo, la sistematización de los recursos humanos existentes en los diferentes organismos del sistema penal juvenil (cantidad,

procedencia disciplinar, tareas desarrolladas, articulaciones existentes con el Poder Judicial y ministerios públicos, sueldos) buscó analizar en qué medida la interdisciplinariedad es una característica de la intervención, y cuáles son las condiciones que la favorecen u obstaculizan.

El trabajo de campo fue complejo: en algunas provincias no fue posible entrevistar a funcionarios o agentes del organismo administrativo, en otras no se logró concretar entrevistas con magistrados, mientras que en otra localidad los obstáculos se presentaron en relación con el Ministerio Público.

A su vez, cabe destacar que el relevamiento de información se enfrentó a un obstáculo que es persistente en el sistema de justicia juvenil: la falta de estadísticas, de información presupuestaria accesible y de datos confiables sobre la composición de los organismos, incluyendo los datos exactos y exhaustivos del funcionariado. Los sistemas penales juveniles no disponen, en general, de registros estadísticos homogéneos ni comparables. Esto dificulta el diseño de acciones específicas y la evaluación y monitoreo de las intervenciones implementadas.

Más allá de estas limitaciones, a partir del trabajo de campo se construyó un consistente corpus documental compuesto por ciento diez entrevistas realizadas a diferentes tipos de actores⁸.



8. El trabajo de campo realizado en la provincia de Mendoza fue llevado a cabo por el equipo del Ministerio de Justicia de la Nación.

Tabla 2. Cantidad de actores entrevistados por «tipo de actor»

	Jueces	Defensores	Fiscales	Poder Ejecutivo	Programas especializados	Otros	Total
Neuquén	2	2	2	2	1	4	13
Jujuy	1	5	1	2	1	11	21
Santa Fe	3	1	1	1	1	7	14
Córdoba	3	2	3		1	7	16
Mendoza	3	3	3	1	1		11
PBA	5	6	4	4	5	4	28
Nación		1	1	2	2	1	7
Totales	17	20	15	12	12	34	110

El análisis de los datos producidos y recabados durante la investigación se realizó de dos maneras. Por un lado, se buscó que las categorías delimitadas por la literatura y el objeto de indagación (presentadas en el capítulo anterior) guiaran la producción de los datos y la selección de los núcleos temáticos a incluir en el análisis. Por el otro, las categorías y los temas emergentes y relevantes permiten evitar los problemas de validez que supondría pretender ajustar la realidad a la teoría preexistente. Asimismo, para considerar la representatividad de los datos, buscamos iluminar las prácticas que caracterizan al sistema penal juvenil (regularidades) mediante procedimientos de

reducción y sistematización de los datos en matrices e informes provinciales, evitando así el impresionismo surgido del trabajo de campo.

La presentación de la evidencia empírica se sostiene en la producción estilizada de los procedimientos y prácticas relevados, así como la sistematización de las percepciones y valoraciones de los actores. Para evitar la presentación de largos registros de campo, el informe presenta solo algunos ejemplos específicos de la evidencia cualitativa⁹.

9. Los informes detallados por provincia no se presentan en este documento pero pueden ser solicitados a los autores.

3

Caracterización del sistema penal juvenil en Argentina

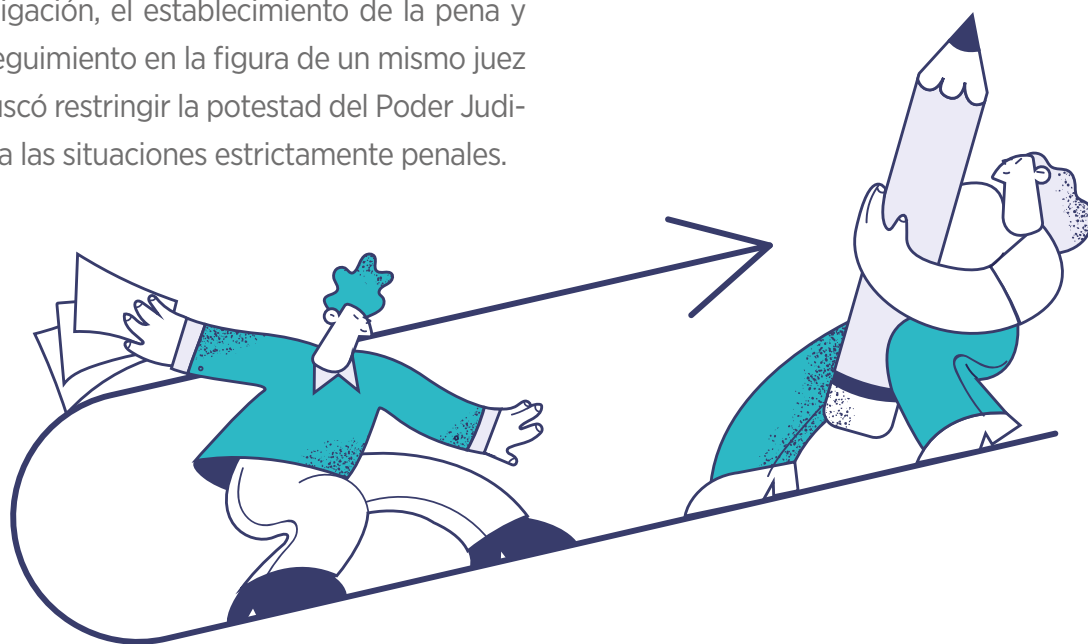


3.1.	Contexto normativo	42 Pág.
3.2.	Estructura judicial a nivel provincial	43 Pág.
3.3.	Previsiones normativas de medidas alternativas al proceso penal	45 Pág.
3.4.	Criterios para el uso de medidas alternativas	47 Pág.
3.5.	Dispositivos para la implementación de medidas alternativas al proceso penal y a la pena	51 Pág.
3.6.	Existencia de recursos interdisciplinarios	53 Pág.
3.7.	Buenas prácticas en justicia restaurativa y abordaje interdisciplinario	73 Pág.

3.1 Contexto normativo

En Argentina, el Régimen Penal de la Minoridad instituido por el Decreto-Ley 22.278 es la norma de fondo vigente para administrar judicialmente los hechos delictivos cometidos por los NNyA. Esta normativa está basada en los principios tutelares que rigieron la justicia para menores de edad durante gran parte del siglo XX en diferentes países de la región. Más allá de su vigencia, en los últimos veinticinco años ha habido una producción legislativa y jurisprudencial a nivel nacional que procuró limitar la concentración de la investigación, el establecimiento de la pena y el seguimiento en la figura de un mismo juez y buscó restringir la potestad del Poder Judicial a las situaciones estrictamente penales.

La principal medida a nivel nacional fue la sanción de la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (26.061/2005). Si bien no regula la cuestión de los adolescentes infractores, establece una serie de garantías para los NNyA que se encuentren bajo proceso judicial (derecho a ser oídos y a que su opinión sea tenida primordialmente en cuenta). La ley también incidió en el régimen penal juvenil al quitarle al juez penal la atribución de «disponer tutelarmente» y privar de libertad a NNyA no punibles.



3.2 Estructura judicial a nivel provincial

El carácter federal de la República Argentina se traduce en una diversidad y pluralidad de modelos de organización y procedimientos judiciales. Con excepción de la Justicia Federal, que tiene competencia en todo el país, cada provincia (sumada la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con su propia particularidad)¹⁰ tiene una justicia provincial con competencia para intervenir ante la comisión de delitos comunes (justicia ordinaria). En el caso de la administración judicial penal para menores de edad, la competencia se complementa dado que algunas provincias cuentan con procedimientos y autoridades específicas para las personas menores de edad, derivados de la existencia de un fuero de menores, que no se restringe al ámbito penal y extiende su competencia a distintas temáticas (familia, civil, y asistencial).

10. Antes de convertirse en ciudad autónoma, la ciudad de Buenos Aires contaba con una organización judicial y de procedimientos que derivaban de la justicia nacional. Al día de hoy, no todas las competencias penales se han transferido a los tribunales de la ciudad, por lo que coexisten dos modelos de organización de justicia con sus procedimientos y competencias específicas.

Los modelos procesales penales que instituyen las provincias pueden poseer un procedimiento más cercano al tipo inquisitivo mixto¹¹, inspirado en el Código Procesal Penal de la Nación, o bien uno más cercano al modelo acusatorio¹². En general, las jurisdicciones que poseen procedimientos de tipo acusatorio no solo poseen mecanismos más

11. Los sistemas inquisitivos concentran en una sola persona (un órgano oficial) las funciones fundamentales del proceso (acusación, defensa y decisión). El modelo «mixto» se nutre esencialmente de aspectos del sistema inquisitivo. En este tipo de modelo existe una etapa de investigación previa llamada «instrucción» a cargo de un juez de instrucción, etapa que no se restringe a otorgar fundamento probatorio a la acusación, sino que avanza sobre la etapa del juicio y tiende a dar también basamento probatorio a la sentencia definitiva. Este paradigma «mixto» incorpora actualmente aspectos del acusatorio, como la separación «formal» de los roles de acusación y juzgamiento, la incoercibilidad moral del imputado, la inviolabilidad de su defensa y el principio de inocencia. Así, a partir de este *aggiornamento* del sistema, se entiende que el juicio debe basarse en una acusación preparada, sostenida y acreditada por los órganos oficiales encargados de la persecución penal (Ministerio Público Fiscal) y desarrollarse en forma oral y pública, con inmediación de los sujetos procesales y los elementos de prueba.

12. Este sistema concibe a la «verdad jurídica» como una construcción producto de una negociación entre las partes implicadas, más que en una realidad a ser descubierta mediante aproximaciones sucesivas. El proceso admite la posibilidad excepcional de privar al imputado de su libertad antes de la condena, pero solo como una medida cautelar de los fines del proceso, nunca como una sanción anticipada. Las funciones de acusar, defender y juzgar se encomiendan a sujetos diferenciados e independientes entre sí.

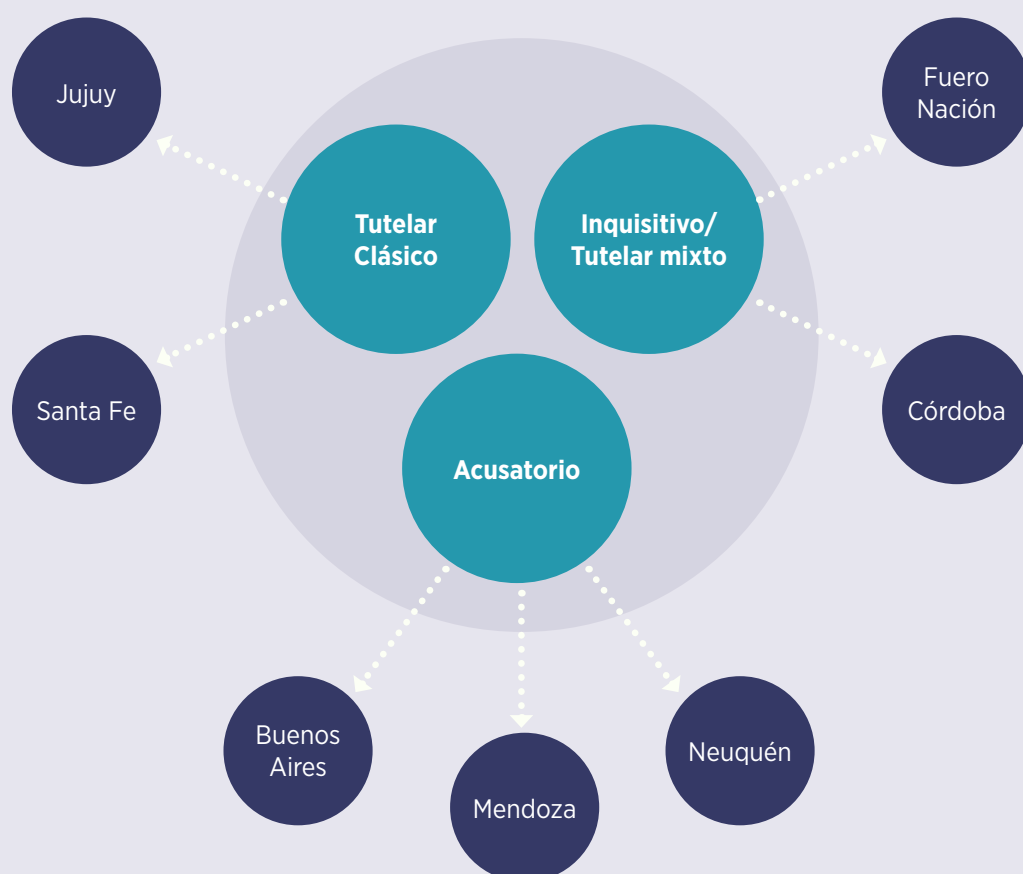
eficientes para respetar las garantías del debido proceso, sino que también son formalmente más proclives a incorporar nuevos modos de terminación de los procesos que no impliquen llegar a su finalización solo a través de un juicio.

Respecto de la organización judicial con competencia para NNA infractores, la mayoría de las provincias tiene un sistema «tutelar clásico», basado en el típico régimen de la minoridad (con competencia en cuestiones familiares, asistenciales y penales). Algunas otras tienen un sistema tutelar que se puede denominar «mixto», que consiste en un fuero de menores con la inclusión de algunas garantías procesales

e institutos específicos alternativos. Otras provincias no cuentan con fuero especializado en menores de edad y esas causas son tramitadas por la justicia ordinaria de adultos. De otro tipo son los sistemas en los que existe una justicia penal juvenil especializada, con sistema acusatorio.

En lo relativo a las jurisdicciones relevadas, el fuero nacional radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Córdoba muestran una estructura judicial de tipo tutelar inquisitivo mixto; las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Neuquén presentan una estructura especializada de tipo acusatorio; Jujuy y Santa Fe poseen un sistema tutelar clásico.

Gráfico 1. Tipos de Sistema penal juvenil por jurisdicción



33 Previsiones normativas de medidas alternativas al proceso penal

En relación a las previsiones normativas en materia de medidas alternativas al proceso y a la privación de libertad, el panorama es muy variable entre provincias.

Varias jurisdicciones de Argentina han reformado su legislación procesal penal juvenil incorporando de manera diversa

algunos de los postulados del marco internacional de derechos humanos para la infancia. Entre las provincias seleccionadas para esta investigación Buenos Aires instituyó el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil a través de la Ley 13.634. Esa ley incorpora institutos procesales que permitieron transformar sustantivamente el régimen penal de menores.

Tabla 3. Leyes provinciales en lo penal juvenil

Jurisdicciones	Ley penal juvenil / Año de sanción
Provincia de Buenos Aires	13.634 / 2006
Córdoba	9.944 modificada por Ley 10.637 / 2019
Fuero Nación (CABA)	Decreto-Ley Nacional 22.278 / 1980*
Jujuy	5288 / 2001
Mendoza	6354 / 1995
Neuquén	2302 / 1999
Santa Fe	11.452 / 1996

* Se trata de la norma nacional que regula el denominado Régimen Penal de la Minoridad

La previsión de medidas alternativas en las normativas provinciales es muy variable. También lo es en qué instrumento son recogidas y cuál es el modelo de procedimiento en que se inscriben.

A nivel nacional, en la mayoría de las jurisdicciones está prevista la suspensión del juicio a prueba, mientras que el principio de oportunidad procesal se encuentra reglado en la mayoría de las provincias que poseen códigos procesales de tipo acusatorio. Sin embargo, en pocos casos se recoge la especialidad del proceso penal juvenil. En efecto, en muchos casos los Códigos Procesales Penales provinciales contienen institutos procesales que serían beneficiosos para la justicia penal juvenil, pero muchas veces los menores de edad se encuentran expresamente excluidos. La mediación y la conciliación están previstas en pocas provincias y también de modo variado.



Tabla 4. Previsiones legislativas de medidas alternativas al proceso penal en las jurisdicciones seleccionadas

Medidas alternativas al proceso penal	Jurisdicciones
Principio de oportunidad y remisión	Provincia de Buenos Aires - Mendoza - Neuquén
Mediación penal	Jujuy (para mayores) - Mendoza (especializado) - Neuquén - Provincia de Buenos Aires - Santa Fe
Conciliación y reparación	Neuquén
Suspensión del juicio a prueba	Fuero Nación (Código Procesal Penal de la Nación) - Mendoza - Neuquén - Provincia de Buenos Aires - Jujuy - Córdoba

34

Criterios para el uso de medidas alternativas

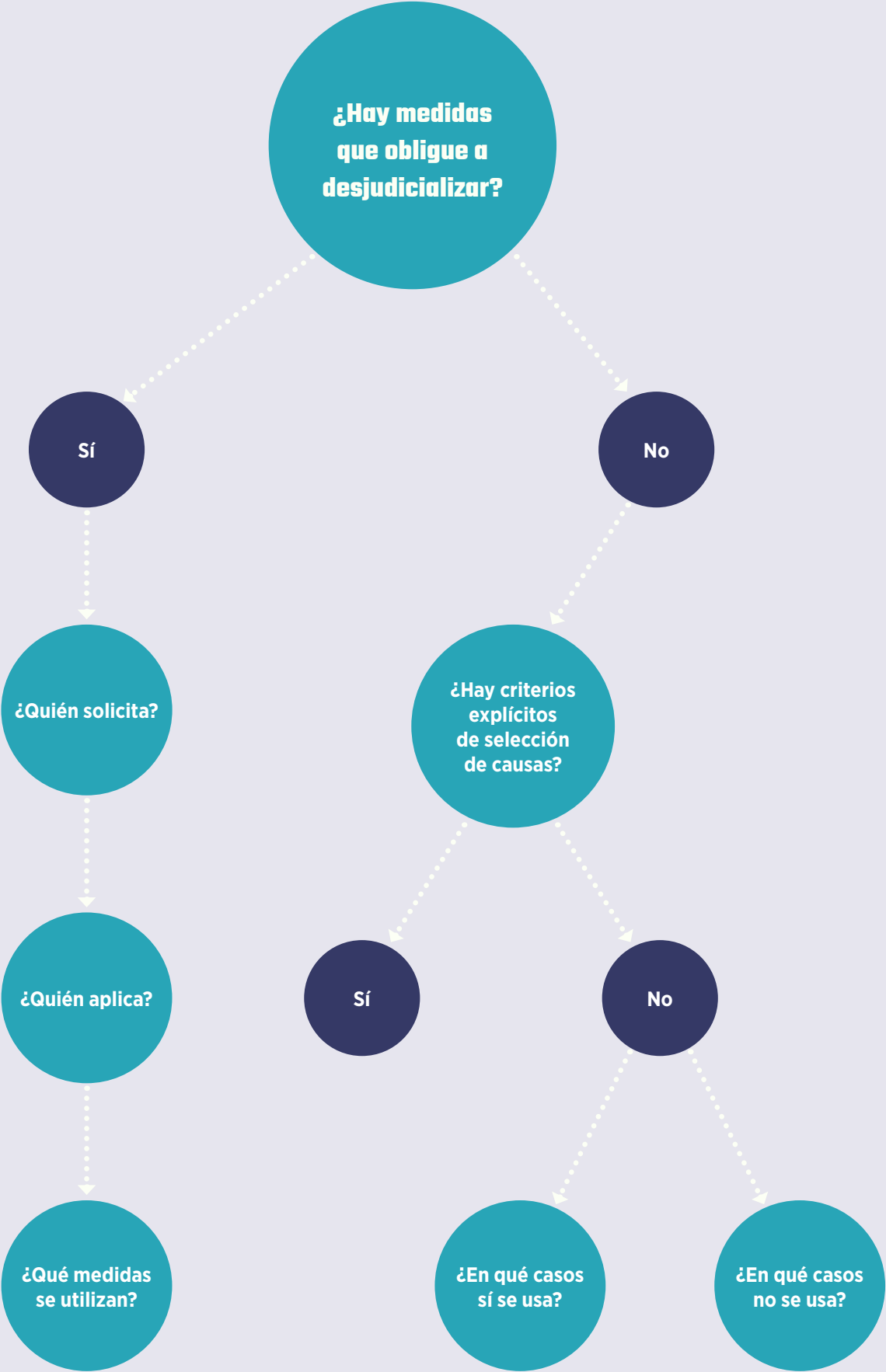
No obstante las reformas procesales, la mayoría de las provincias seleccionadas carece de legislación procesal que torne obligatoria la utilización de medidas alternativas al proceso penal de adolescentes. Por el contrario, tiende a darse una situación de discrecionalidad en la elaboración de criterios sobre el uso efectivo de medidas alternativas.

Los criterios son usualmente implícitos o consuetudinarios y flexibles, y se basan en algunas de las siguientes dimensiones:

- **La evaluación de la causa:** las medidas alternativas suelen ser aplicadas en los casos de delitos leves, delitos de primera vez, conflictos de bajo potencial ofensivo, mal comportamiento, etcétera. Existe un consenso bastante extendido respecto de la no aplicación de estas medidas en delitos sexuales, aún cuando algunos operadores hayan matizado esta postura.
- **La evaluación del caso:** NNyA con recursos familiares y subjetivos valorados positivamente por los equipos.

Respecto de los criterios de exclusión, en general las medidas alternativas no se aplican en el caso de los NNyA no punibles ya que estos son sobreseídos por edad.

Gráfico 2. Pasos y criterios de desjudicialización





Según los datos relevados, en la mayoría de las jurisdicciones se utiliza el principio de oportunidad procesal, aunque en otras jurisdicciones no está disponible. La suspensión del juicio a prueba es la medida alternativa más utilizada en todo el país, y en la mayoría de las jurisdicciones seleccionadas se implementa sin que medie la derivación a un programa de apoyo o seguimiento. En relación con la mediación, la frecuencia de uso suele ser baja. Su utilización tiende a incrementarse en las jurisdicciones en que existe algún dispositivo específico que realice mediación penal juvenil, aunque ello no garantiza una utilización extensiva de la medida.

En la Tabla 5 se presentan los datos relativos al uso de medidas alternativas al proceso penal en cada una de las jurisdicciones seleccionadas, según el órgano/ agente que las propone y el organismo o equipo que las implementa.

En las jurisdicciones seleccionadas, la aceptación de las medidas alternativas, en términos generales, tiende a ser escasa. Asimismo, sucede que en los casos en que pareciera existir un consenso generalizado respecto de los beneficios de su empleo, hay escasez de profesionales formados en estrategias restaurativas y ello dificulta su efectiva implementación. Su utilización, en gran medida, depende de la existencia de dispositivos especializados que promuevan su uso, del convencimiento y la capacidad de incidencia de los actores judiciales respecto de los beneficios de la desjudicialización y del conocimiento y la capacitación en prácticas restaurativas que tengan los distintos actores.

Tabla 5. Medidas alternativas al proceso utilizadas en las jurisdicciones seleccionadas según el actor que propone y el organismo que implementa

Jurisdicción	Medida alternativa	Propone	Implementa
Buenos Aires	<ul style="list-style-type: none"> • Principio de oportunidad. • Remisión. • Mediación. • Suspensión del juicio a prueba. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalía. • Juzgado. • Fiscalía, juzgado, defensa, cuerpo técnico auxiliar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivos específicos en mediación y justicia restaurativa (Poder Ejecutivo y Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, descentralizados territorialmente). • Centros Socio-Comunitarios (CESOC, dispositivo de seguimiento territorial, PE).
Córdoba	<ul style="list-style-type: none"> • Mediación (reparación y acuerdo comunitario). • Sobreseimiento (luego de seis meses de prueba, según Ley 10637/19). • Suspensión del juicio a prueba. 	<ul style="list-style-type: none"> • Juzgado. • Defensa. • Juzgado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Programa mediación (PE). • Programa de seguimiento en territorio (solo en Capital).
Jujuy	<ul style="list-style-type: none"> • Suspensión del juicio a prueba (solo en un juzgado). • Conciliación • Criterio de oportunidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Juzgado. • Fiscalía. 	<ul style="list-style-type: none"> • Libertad asistida (PE). • Juzgado (solo uno).
Mendoza	<ul style="list-style-type: none"> • Mediación (muy poco). • Reglas de conducta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalía. • Defensoría. • Juzgado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuerpo de mediadores (PJ). • Unidad de Medidas Alternativas (PE).
Nación	<ul style="list-style-type: none"> • Conciliación (reparación del daño). • Suspensión del juicio a prueba. • Mediación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Equipo interdisciplinario (delegados inspectores) - CNCyC. • Defensa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Delegados inspectores (CNCyC). • Programa de Resolución Alternativa de Conflictos (Defensoría General).
Neuquén	<ul style="list-style-type: none"> • Principio de oportunidad. • Mediación. • Remisión. • Suspensión del juicio a prueba (más usada). 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalía. • Fiscalía. • Juzgado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalía. • Dir. Mediación Penal (MPF) / Prog. Mediación Escolar (DP). • Libertad Asistida (PE).
Santa Fe	<ul style="list-style-type: none"> • Suspensión del juicio a prueba. • Mediación (no desjudicializante). • Prácticas restaurativas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Juzgado. • Juzgado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Juzgado. • Oficina de Mediación (Corte, no especializada para jóvenes). • Juzgado (artesanalmente).

35

Dispositivos para la implementación de medidas alternativas al proceso penal y a la pena

La existencia de dispositivos específicos y especializados, para la implementación de medidas alternativas al proceso penal, se revela como una condición para la elegibilidad de medidas tales como la suspensión de juicio a prueba, la mediación y la conciliación.

En la reciente investigación de Unicef (2018) sobre el uso de medidas alternativas al proceso penal y a la pena en Argentina, se halló que la mayoría de las provincias carecía de dispositivos específicos para instrumentar medidas alternativas. Asimismo, se identificó que la viabilidad de estos dispositivos, su eficacia, efectividad e impacto en las formas de administrar justicia para adolescentes descansa, principalmente,

en los recursos humanos disponibles para sostener las medidas alternativas. No obstante, en todos los casos, se detectó que cuando existen dispositivos específicos (por ejemplo, centros de resolución alternativa de conflictos, programas de justicia restaurativa, áreas de mediación penal) estos disponen de una planta de personal limitada que se halla restringida a las áreas metropolitanas y que ello incide directamente en la cantidad de causas en las que pueden llegar a instrumentar las medidas.

A nivel país, algunas provincias cuentan con dispositivos para instrumentar medidas alternativas al proceso penal, pero estos no son especializados en jóvenes —entre ellas, Salta, Santiago del Estero,

Chubut, Mendoza, Neuquén, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Río Negro y también en Bariloche y algunas localidades de la provincia de Buenos Aires y CABA en su justicia local (Unicef, 2018)—. En otras jurisdicciones, los dispositivos que son utilizados a fin de cumplimentar *probation* o reglas de conducta son los programas o servicios existentes para las medidas alternativas a la privación de libertad o similares. Por ejemplo, los Centros Socio-Comunitarios (CESOC) en provincia de Buenos Aires. En las jurisdicciones que no poseen dispositivos de ninguna índole, las medidas alternativas al proceso penal son implementadas a través de dos modalidades principales: derivación y seguimiento por parte del área de niñez del Poder Ejecutivo o seguimiento por parte del juzgado o la fiscalía.

Respecto de las jurisdicciones estudiadas en esta investigación, se identificó que solo en dos provincias existen dispositivos es-

pecíficos y especializados en adolescentes para la instrumentación de medidas alternativas al proceso penal, en los que se desarrolla principalmente la mediación.

En la Tabla A.1 (en el Apéndice) se presentan los diferentes dispositivos identificados en las jurisdicciones relevadas, clasificados según su dependencia institucional (Poder Judicial o Poder Ejecutivo) y según el tipo de recurso que brinda y la aplicación o no de medidas alternativas al proceso penal.

Del relevamiento efectuado surge que todas las provincias cuentan con programas específicos para la aplicación de medidas no privativas de libertad. No obstante, no todos ellos desarrollan prácticas restaurativas o participan en la instrumentación de medidas alternativas al proceso penal. Solo los programas específicamente creados bajo presupuestos de justicia restaurativa o principios de desjudicialización tienden a ser utilizados para la toma de medidas alternativas al juicio penal.



3 Modelos organizativos de lo interdisciplinar

La mayoría de las jurisdicciones cuenta con equipos interdisciplinarios de dependencia judicial, con una gran variabilidad en términos de recursos y condiciones de trabajo. En general, los operadores interdisciplinarios de dependencia judicial poseen niveles salariales y de estabilidad mayores que los de los equipos y programas dependientes del Poder Ejecutivo y además tienen un mejor acceso a capacitaciones en servicio. Los operadores del Poder Ejecutivo poseen una carga de casos por agente mucho mayor que los del Poder Judicial, lo que refleja una gran disparidad entre ellos.

En algunas jurisdicciones, los equipos o agentes interdisciplinarios realizan tareas que combinan las tradicionales funciones periciales con el desarrollo de planes de

intervención, en tanto otras jurisdicciones cuentan con dispositivos interdisciplinarios destinados de manera específica al asesoramiento especializado al Poder Judicial y el desarrollo de medidas de seguimiento y el tratamiento tutelar. Más allá de esta variabilidad, muy pocos equipos o agentes interdisciplinarios se orientan a instrumentar medidas alternativas al proceso penal o prácticas restaurativas.

A su vez, como ya se ha señalado, todas las jurisdicciones cuentan con programas alternativos a la privación de libertad, dependientes del Poder Ejecutivo, en los que también se desempeñan profesionales provenientes de disciplinas no jurídicas, con una gran prevalencia de psicólogos y trabajadores sociales. La tarea principal de estos profesionales es el acompañamiento y supervisión de los NNyA.

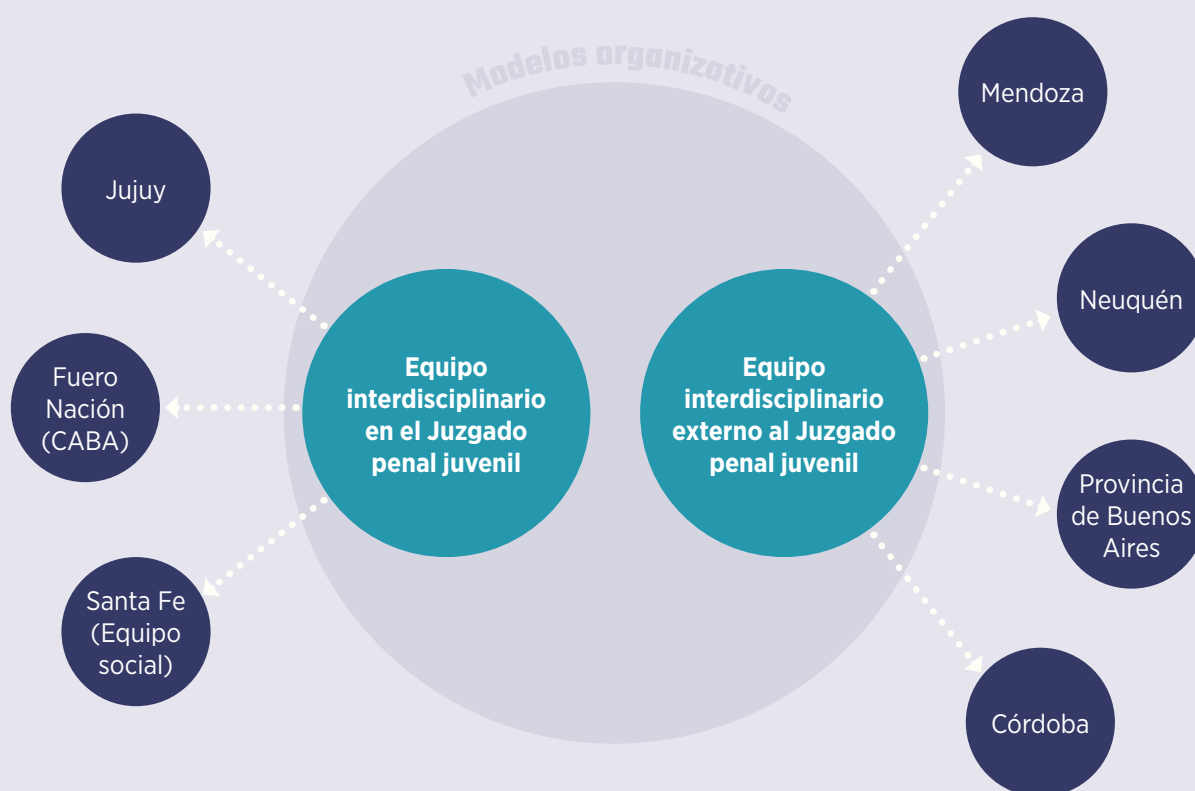
En la Tabla A.2 (en el Apéndice) se identifican los dispositivos conformados por recursos interdisciplinarios que fueron relevados en las jurisdicciones estudiadas, según las siguientes variables: dependencia, año de creación, cantidad de operadores, modalidad de contratación y profesión. La información sobre la composición de este recurso no es exhaustiva y, a la vez, la propia calidad del dato es relativa, dado que muchos informantes no pudieron proveer la información de registros administrativos. Esto no permite determinar el número total de operadores interdisciplinarios por jurisdicción.

3.6.1.

Modelos organizativos de lo interdisciplinar

En las jurisdicciones relevadas, el lugar de la interdisciplina en la gestión de la conflictividad socio penal adolescente es limitado y variable. En principio, es posible identificar dos grandes modelos organizativos que son también modelos de intervención distintos.

Gráfico 3. Modelos organizativos de lo interdisciplinar en el ámbito judicial





En su origen, la incorporación de las disciplinas sociales y humanas en los antiguos juzgados de menores tenía como fin determinar si el adolescente se encontraba en situación de desamparo moral o material, o si era peligroso. Luego, para diferenciarse de este abordaje derivado del modelo tutelar, en varias jurisdicciones se reemplazaron los asistentes tutelares por equipos interdisciplinarios que, en algunos casos, fueron reubicados en una sede diferente a la de los juzgados con el objetivo de no juzgar a los adolescentes por lo que son (derecho penal de autor), sino por lo que hicieron (derecho penal de acto). Con matices, este es el caso de algunas provincias estudiadas.

Por ejemplo, en lugares donde se implementó el fuero penal juvenil, los juzgados de menores fueron reconvertidos y los

profesionales que formaban parte de sus equipos técnicos fueron reasignados a cuerpos técnico auxiliar. No obstante, ello no redundó necesariamente en un trabajo de seguimiento restaurativo. En otro caso, los juzgados del fuero penal juvenil solo cuentan con un cuerpo auxiliar interdisciplinario que depende de la Corte Suprema de Justicia provincial, pero no es especializado ni realiza abordaje socioeducativo ni restaurativo. En otro caso, los juzgados penales juveniles —solo existentes en la ciudad capital— no cuentan con equipos interdisciplinarios y solo el Ministerio Público de la Defensa posee operadores interdisciplinarios. Estos operadores no están especializados e intervienen en todo tipo de causas, incluyendo las penales en las que se les habilita una intervención en asuntos puntuales.

En otros casos, la transformación del fuero penal de menores consistió en modificar la funcionalidad de los equipos pero mantener la dependencia judicial.

En un caso se disolvió un área específica de los antiguos juzgados de menores, compuesta mayoritariamente por trabajadores sociales que fueron reubicados en parte en los juzgados de familia, lo que derivó en la creación de un equipo social con asiento en cada uno de los juzgados. En este caso, el Poder Judicial cuenta con un equipo interdisciplinario que depende de la Corte Suprema de Justicia y que no interviene exclusiva ni prioritariamente en el fuero penal juvenil pero que está habilitado para hacerlo.

En los casos en que se mantiene la existencia de equipos interdisciplinarios con asiento en los juzgados se ha propiciado una relación de cercanía y dependencia informal con el juez a cargo ya que, en buena medida, responden a él y su campo de acción está moldeado por el perfil que tenga el juzgado. Esto sucede en otros casos en que, si bien los equipos no dependen formalmente de los juzgados sino de áreas específicas dentro de la rama judicial, los delegados inspectores se desempeñan en los propios juzgados.

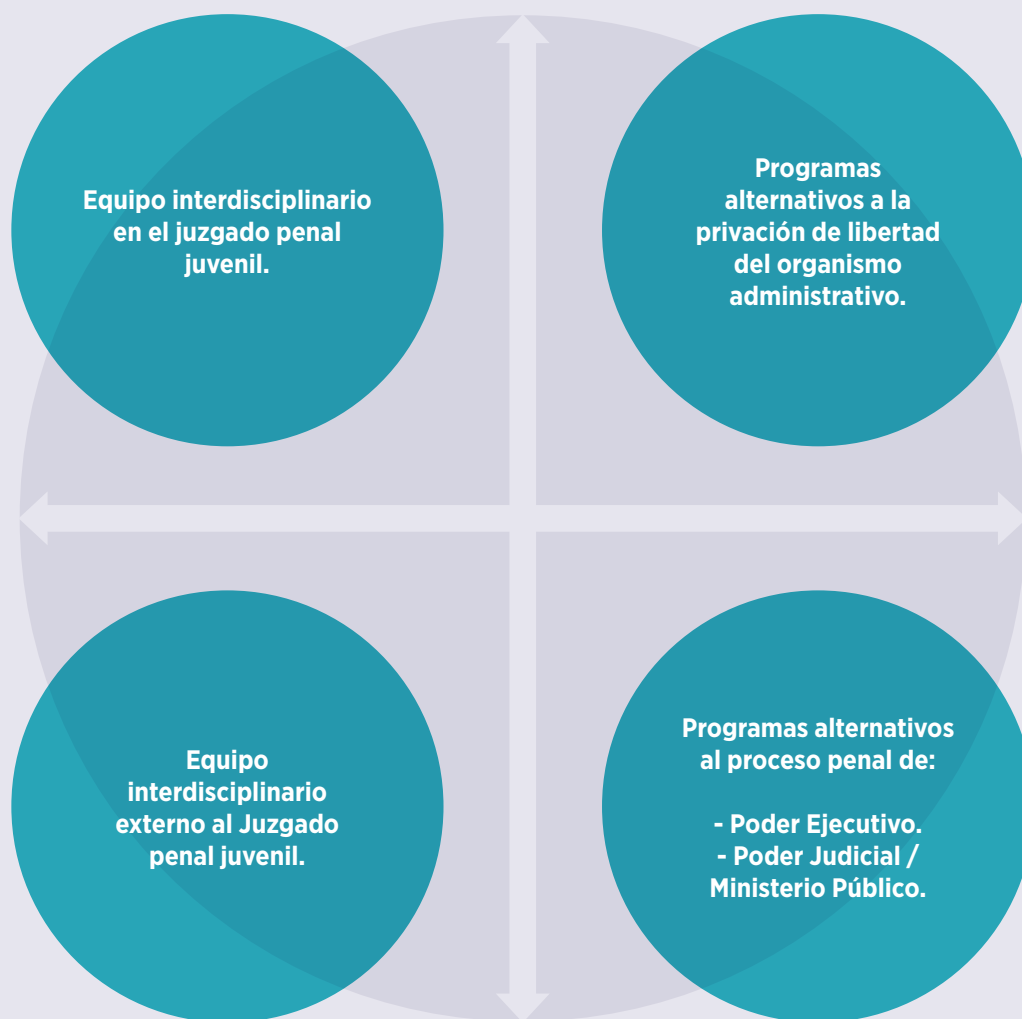
También se observaron casos particulares, en el que el fuero de menores no tuvo nunca operadores interdisciplinarios. En este caso, actualmente los equipos técnicos del Poder Judicial que participan de las causas penales juveniles no son exclusivos en esa competencia, porque responden al fuero que también tiene competencias en protección de derechos y violencia familiar y de género, o porque son equipos de las sedes a disposición de todos los juzgados.

En este proceso de rediseño de la estructura típica del antiguo fuero minoril, emprendida para dejar atrás sus aspectos tutelares, el diseño que procuró escindir los equipos interdisciplinarios del juzgado se acompañó con la idea de que el abordaje interdisciplinario y en territorio debía ser desarrollado por otros tipos de organismos, ligados a una lógica de políticas públicas y de abordaje socioterritorial. Por ello, en ese modelo organizativo, el Poder Judicial y eventualmente también el Ministerio Público se deben articular con dispositivos o programas dependientes de los organismos administrativos de protección de derechos del Poder Ejecutivo, quienes son los que implementan las medidas de privación de libertad, las medidas alternativas al encierro e incluso, en algunos pocos casos, las medidas alternativas al proceso penal.

De esta manera, los modelos organizativos antes descritos se combinan, y eventualmente articulan o se completan con otros programas y dispositivos:



Gráfico 4. Modelos organizativos de lo interdisciplinar con dispositivos del Poder Ejecutivo



Estos programas pueden ser clasificados en tres tipos de acuerdo a sus modalidades predominantes de abordaje:

- Programas de libertad vigilada.
- Programas de seguimiento territorial.
- Programas que implementan prácticas restaurativas.

3.6.2.

Procedimientos, tareas y recursos movilizados

La labor principal llevada a cabo por los agentes con formación en disciplinas sociales y humanas se orienta a proveer información al juez o a otros funcionarios judiciales.

Se destaca así la función pericial, que consiste en la indagación de la situación sociofamiliar del joven para dar cumplimiento a las medidas tutelares o socioeducativas previstas en el régimen penal de la minoridad. Para cumplimentar esa función, en algunas jurisdicciones se dispone de un protocolo o formulario donde se encuentra pautado qué se debe consignar y valorar, de manera que se proporcione al juez o a los otros funcionarios judiciales intervinientes un cuadro lo más amplio posible

de la situación social y familiar del joven. Si bien estos protocolos son útiles para fijar estándares que ordenen la tarea y muchas veces están diseñados para que las intervenciones se ajusten a un enfoque de derechos, pueden conducir a limitar la mirada de manera tal que solo se ponderen y evalúen aquellas situaciones que se consideren útiles para la «causa» (Graziano, 2017). Por ello, y desde esta perspectiva, la interdisciplina es un sinónimo de «informe». La información relevada por estos operadores obedece en muchos casos a criterios de «peligrosidad» que hacen tanto de la zona de residencia y de la familia de los adolescentes, como de diferentes indicadores sociales (concurencia a la escuela, consumo de sustancias, trabajo, amistades, etcétera) que son indicios de su eventual compromiso con la actividad delictiva y funcionan como coordenadas para evaluar la imposición de medidas o tratamientos.



Muchas veces los informes son confeccionados a partir de una entrevista que se realiza con el adolescente y eventualmente con su familia. En efecto, en varias jurisdicciones (provincia de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Mendoza) los operadores interdisciplinarios dependientes del ámbito judicial forman parte de cuerpos periciales que no realizan un seguimiento de los adolescentes o un trabajo territorial que les permita conocer de primera mano las redes barriales o comunitarias en las que el joven está inserto o puede eventualmente incluirse. Por ejemplo, uno de los equipos entrevistados indicó que no puede brindar información de calidad sobre los recursos territoriales con los que podría contar el joven puesto que no concurren a territorio y argumentan que no es de su competencia o bien que se trata de «zonas peligrosas». Esta falta de trabajo territorial, según algunos actores judiciales, provoca que los informes producidos sean pobres en contenido útil, debido a que no aportan recursos concretos a partir de los cuales elaborar estrategias de desjudicialización o de aplicación de morigeración de medidas (información relativa a programas estatales, de organizaciones de la sociedad civil de distinta índole, así como redes familiares y comunitarias que puedan viabilizar la finalización de un proceso penal o su tránsito en libertad).

En otras jurisdicciones, se relevó que la finalidad del abordaje del equipo interdisciplinario es la producción de un informe completo que contemple el «diagnóstico

preventivo, pronóstico y tratamiento». En este contexto, la intervención suele admitir únicamente la realización de este informe y no permite avanzar en profundidad en el tratamiento con los jóvenes.

En algunas jurisdicciones donde los equipos interdisciplinarios no dependen ni son exclusivos del fuero penal juvenil, se les solicita únicamente información concreta respecto de determinados asuntos a considerar para confeccionar un diagnóstico para remitir al magistrado. De esta manera, la intervención de los operadores interdisciplinarios queda limitada a la realización de pericias. En algunos casos, estas pericias no son accesibles a la defensa ni admiten peritos de control¹³.

En otras jurisdicciones, aun cuando el informe sea una pieza clave y central de la intervención interdisciplinaria, se observa un mayor seguimiento de los adolescentes y jóvenes, lo que posibilita abordar de distintas maneras el proceso que transita el joven desde su ingreso al sistema penal y no quedarse con una «fotografía» de su situación, que lo cristaliza en un momento del proceso. Cuando la tarea es organizada desde esta perspectiva se tiende a que el informe sea el corolario de una tarea que no lo tiene como exclusiva razón de ser, sino que se trata de una tarea informada por otros objetivos y metas.

13. Los peritos de control son designados por las partes interesadas con la única función de evaluar o criticar un dictamen pericial.



En estos casos, además de cumplir una función pericial, los operadores interdisciplinarios también realizan acciones de articulación territorial y de seguimiento de los adolescentes. Esto les permite visualizar y ponderar otros tipos de recursos con los que cuenta el joven, su familia o su entorno comunitario, que muchas veces son los que permanecen opacos si el adolescente es evaluado solamente en función de sus capacidades individuales o de manera escindida de su contexto más próximo.

En algunas jurisdicciones estas actividades son desarrolladas por el equipo interdisciplinario del juzgado, que eventualmente se articula con otros organismos. En estos casos, el mayor riesgo es replicar intervenciones tutelares que solo enfoquen en cuestiones asistenciales —de provisión de recursos o tratamientos terapéuticos— o que se transformen en intervenciones guiadas solo por el objetivo de controlar

que el joven cumpla con un «tratamiento tutelar» bastante difuso, a fin de que eventualmente se morigere o no se aplique la pena —en función del art. 4° de la Ley 22.278— y que el adolescente no reitere la comisión de delitos.

En general, el desarrollo de estrategias restaurativas por parte de los equipos interdisciplinarios no es un rasgo predominante de su tarea. En la mayor parte de las jurisdicciones relevadas, los operadores interdisciplinarios no desarrollan ni proponen modos de abordaje restaurativo. Además, la viabilidad de las escasas experiencias existentes depende de la confianza que otros actores judiciales (magistrados, fiscales, defensores) tengan con los operadores interdisciplinarios.

Gráfico 5. Características de las tareas desarrolladas por los equipos/operadores interdisciplinarios



3.6.3.

Multidisciplina o interdisciplina

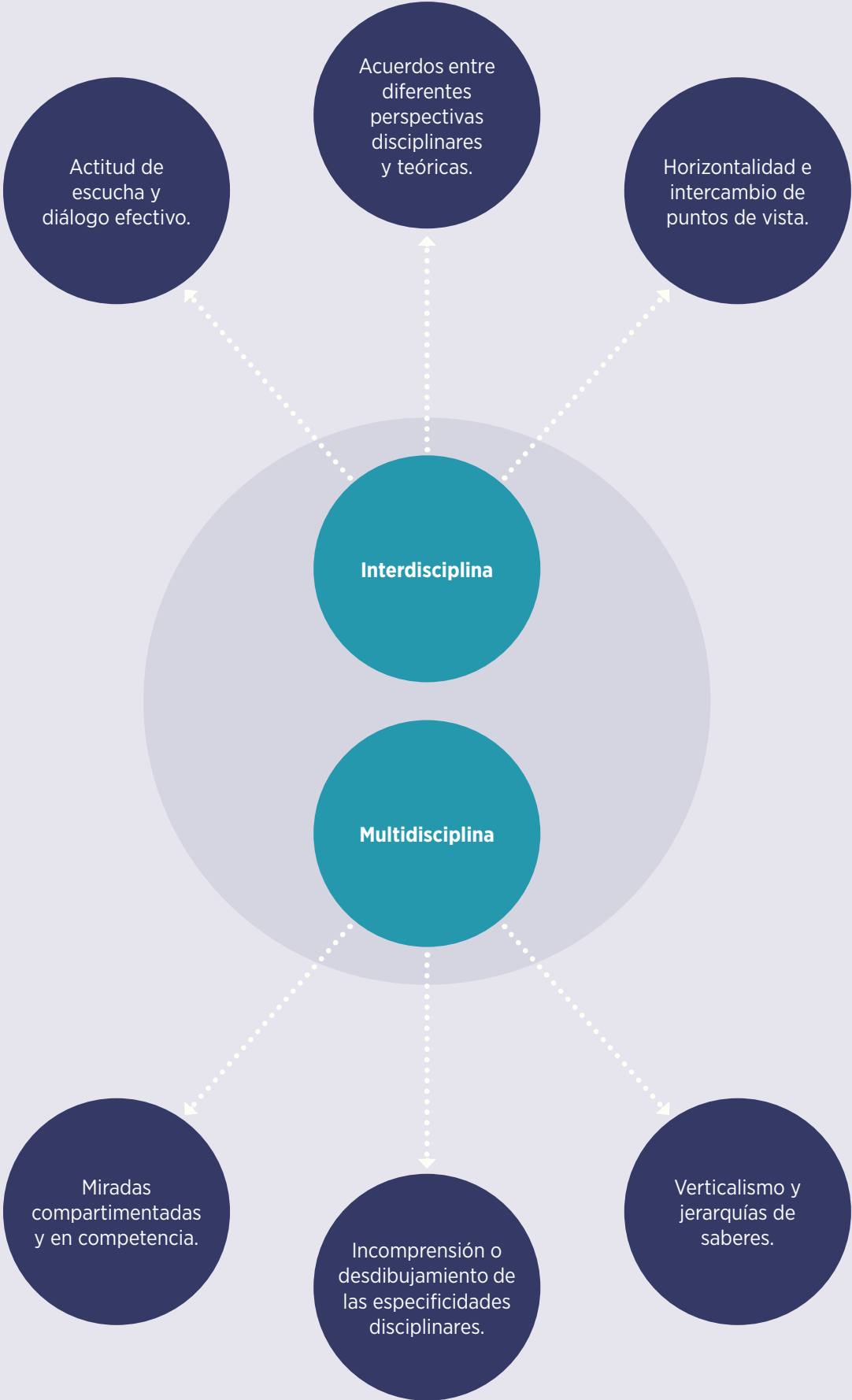
La capacidad de los agentes de orientar, desde el inicio la tarea, de modo interdisciplinario, o bien la producción de interdisciplinariedad como efecto de la realización del informe, es variable dependiendo de las condiciones institucionales en las que trabajan.

Existen algunas capacidades institucionales que propician la interdisciplinariedad, tales como las reuniones programadas en espacios establecidos que cuenten con recursos para la efectivización de la tarea, la protocolización de los informes y las intervenciones, la dotación de recursos para el desarrollo de articulaciones interinstitucionales eficientes, las capacitaciones orientadas a la resolución de problemas de manera conjunta y las modalidades de trabajo que promuevan la construcción dialogal y reflexiva de la intervención. Al contrario, lo que se observa en algunos casos es que lejos de lograr la interdisciplina, lo que existe —según han descrito actores de diferentes jurisdicciones— es multidisciplina, que se traduce en intervenciones recortadas y fragmentadas. Es decir, hay integración de equipos por parte de agentes de distintas disciplinas, pero no existe un trabajo orientado a lograr acuerdos entre disciplinas o a alcanzar espacios de escucha entre diferentes perspectivas teóricas.

En este sentido, una dificultad es integrar el saber jurídico como parte de esa mirada interdisciplinaria. La construcción de una mirada interdisciplinaria que tenga en cuenta tanto las garantías del joven como las condiciones subjetivas y sociales en las que está inmerso y le brinde una posibilidad de reparar o corregir sus actos propiciando soluciones que desjudicialicen el conflicto resulta aún difícil de lograr. En efecto, una de las principales resistencias a la interdisciplina por parte de algunos agentes judiciales se basa en el hecho de que, a la hora de volcar en sus informes apreciaciones sobre los adolescentes, en relación con los hechos que se investigan, se generan posibles afectaciones al derecho de defensa en tanto pueden vulnerar el principio de inocencia. Por ello, resulta necesario no pensar al derecho como algo escindido de la interdisciplina ni tampoco por encima de ella.



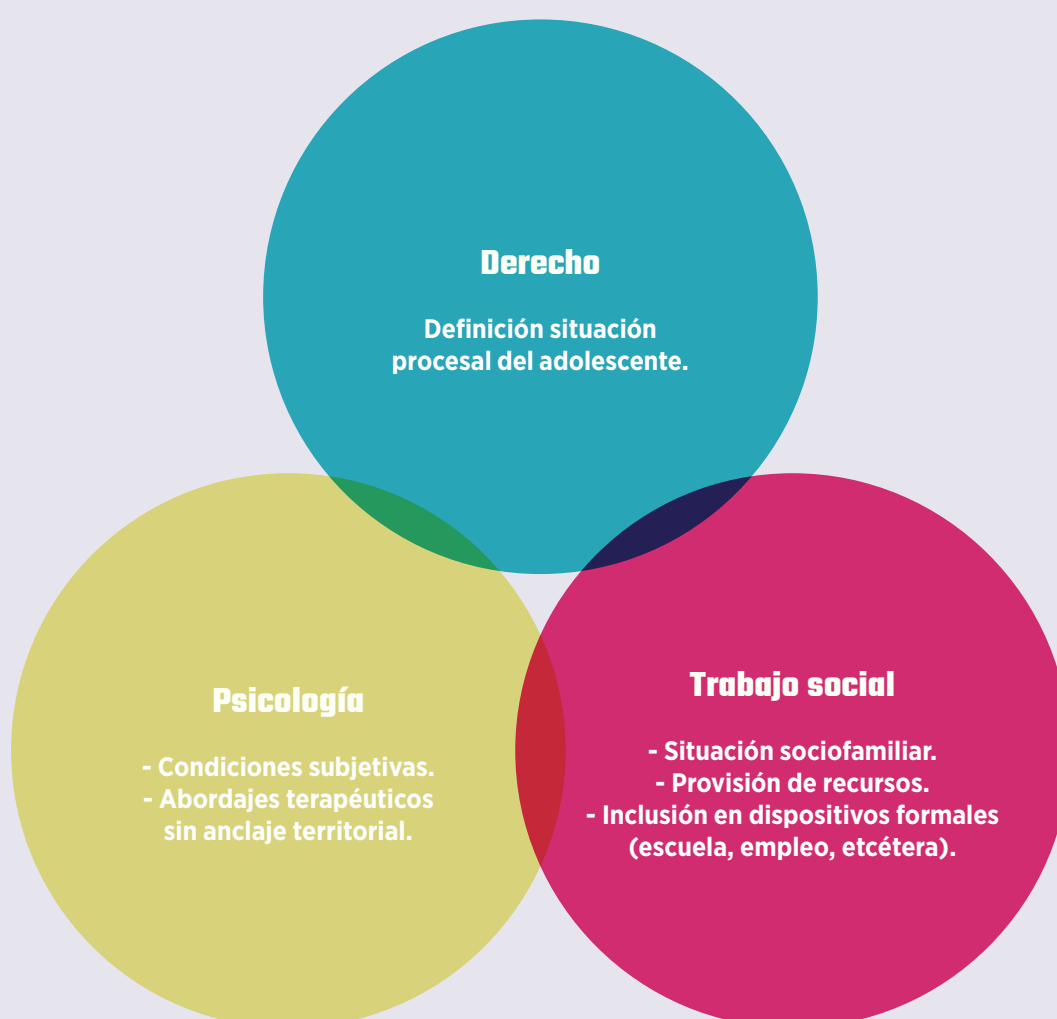
Gráfico 6. Perspectivas de articulación entre disciplinas



También es usual que el saber jurídico monopolice la interpretación y la decisión sobre la situación del adolescente sin establecer un diálogo con los otros saberes. En esos casos prima la verticalidad y la jerarquía de saberes, y las disciplinas no jurídicas son siempre tenidas por auxiliares. En este sentido, la participación de las disciplinas no jurídicas en las decisiones que se toman sobre el adolescente se limita a ser un aporte a la hora de decidir el encierro o la libertad de los jóvenes. Esto limita la ponderación de abordajes alternativos como posibilidad de intervención.

Como rasgo común se destaca el hecho de que, en muchos casos, la interdisciplina se reduce a reproducir la tríada clásica conformada por la psicología, el trabajo social y el derecho. Incluso en los casos en que los equipos se encuentren integrados por profesionales de otras disciplinas —médicos psiquiatras, sociólogos y antropólogos, entre otros— hay una marcada impronta de este esquema organizativo y conceptual en el que esos saberes cumplen roles predefinidos para diagnosticar, abordar y tratar el delito adolescente y juvenil.

Gráfico 7. Tríada disciplinar típica de la justicia penal juvenil





El grado de autonomía técnica de los equipos y operadores interdisciplinarios del ámbito judicial varía. Muchos agentes han precisado que es amplio, puesto que una vez que el juez convalida la estrategia propuesta por los equipos interdisciplinarios, estos realizan articulaciones con instituciones o acompañamiento a jóvenes y familias según su criterio técnico, sin que nadie interfiera en esas decisiones. Aun así, tal autonomía, en general, es reducida, fundamentalmente porque en diversas jurisdicciones los operadores interdisciplinarios se limitan a realizar los informes que son ordenados por los magistrados y solamente ven al joven en ocasión de cumplir con la tarea encomendada. Un factor que es persistente y fue mencionado en todas las jurisdicciones para explicar el grado de autonomía y el margen de acción del que disponen los operadores interdisciplinarios es el de la «confianza».

En general, el ámbito judicial tiene un sesgo verticalista y una organización piramidal, en algunos poderes judiciales más que en otros. Más allá de las reformas impulsadas que tienden a dotar al sistema de algunos institutos y características más propias del sistema acusatorio o adversarial, prevalecen rasgos propios del tradicional sistema inquisitivo. El juez comanda el proceso penal y habilita o no espacios para las sugerencias, las intervenciones o las propuestas. Incluso en algunas jurisdicciones, los fiscales no encuentran disponible el principio de oportunidad procesal.

En ese contexto resalta que en todas las jurisdicciones los entrevistados hayan hecho referencia a la importancia que tiene la confianza y la confiabilidad. Esto es, básicamente, que los operadores interdisciplinarios sean confiables para el juez y los otros funcionarios judiciales. En este mismo sentido, algunos operadores interdisciplinarios han señalado que el grado de incidencia de los informes o de las sugerencias realizadas depende de la proximidad que se tenga con el

juez y la capacidad de sensibilizar, para lo que es importante tener conversaciones informales con el magistrado y generar consensos.

Desde esta perspectiva, se comprende que algunos agentes judiciales parecen preferir los informes y sugerencias realizadas por los operadores interdisciplinarios que dependen del ámbito judicial y no, por ejemplo, a los confeccionados por operadores del ámbito administrativo.

De hecho, también algunos agentes judiciales han relatado que, entre los equipos interdisciplinarios dependientes del Poder Ejecutivo, los jueces tienen más confianza en aquellos que se desempeñan en los dispositivos de régimen cerrado que en los profesionales que trabajan en programas alternativos a la privación de libertad.

En esta línea, hubo agentes judiciales que expresaron que los equipos técnicos del ámbito administrativo pierden objetividad al estar próximos al adolescente. Esto es, se comprometen o se involucran afectivamente con la situación del joven y de su familia, y por ello sus informes o sugerencias resultan «contaminadas».

No obstante, la vinculación del Poder Judicial con los programas alternativos dependientes del Poder Ejecutivo es frecuente. En varias provincias la articulación con los programas de libertad asistida es constante. En general, a estos programas dependientes del Poder Ejecutivo son derivados los NNyA que han sido procesados o aquellos que se encuentran cumpliendo

una *probation*. En estos casos, la calidad de la articulación es variable. Los programas deben informar al juzgado las actividades realizadas por el joven. En casi ninguno de estos programas se instrumentan abordajes de tipo restaurativo. Su intervención suele estructurarse en torno a la articulación territorial y al acompañamiento del adolescente: concretamente, en la inclusión del joven en actividades escolares, recreativas o de capacitación laboral, en acciones relativas al derecho a la salud (mayoritariamente asistencia de consumos problemáticos) y eventualmente en la participación en actividades comunitarias. La finalidad de su abordaje suele expresarse en términos de alcanzar la reinserción, la recuperación y la salida de los jóvenes de la situación conflictiva.

En otras jurisdicciones se ha señalado que desde el ámbito judicial se da poca intervención a los programas alternativos a la privación de libertad dependientes del Poder Ejecutivo, porque sus operadores desarrollan tareas muy similares a las que desempeñan los operadores interdisciplinarios del ámbito judicial y ello genera situaciones de sobreintervención. Esas situaciones, que generan cierto desaprovechamiento y superposición de recursos, reflejan, por un lado, las oportunidades de mejorar las estrategias de articulación interinstitucional. Por otro lado, la sobreintervención conduce a dificultades por parte de los NNyA y sus familias para la «decodificación» de los actores institucionales intervinientes, con consecuencias negativas en cuanto al acceso a la justicia.

En suma, la intervención interdisciplinaria desarrollada por los actores del fuero penal juvenil supone las siguientes posibilidades, no excluyentes entre sí:



Enfoque pericial

Puede centrarse en la situación del NNyA o, menos frecuentemente y dependiendo de su dependencia institucional del fuero de familia, en la determinación de un delito cometido contra el NNyA. Su función es proveer información relevante para el desarrollo de la causa, la toma o no de una medida privativa de libertad y el dictado de sentencia.



Enfoque terapéutico

Propio de equipos con una impronta tradicionalmente más tutelar, las entrevistas adquieren una forma didáctica, de apoyo moral o de contención psicológica. En muchas circunstancias, estas entrevistas/conversaciones son la manera de abordar lo que se interpreta como «responsabilización subjetiva».



Seguimiento territorial

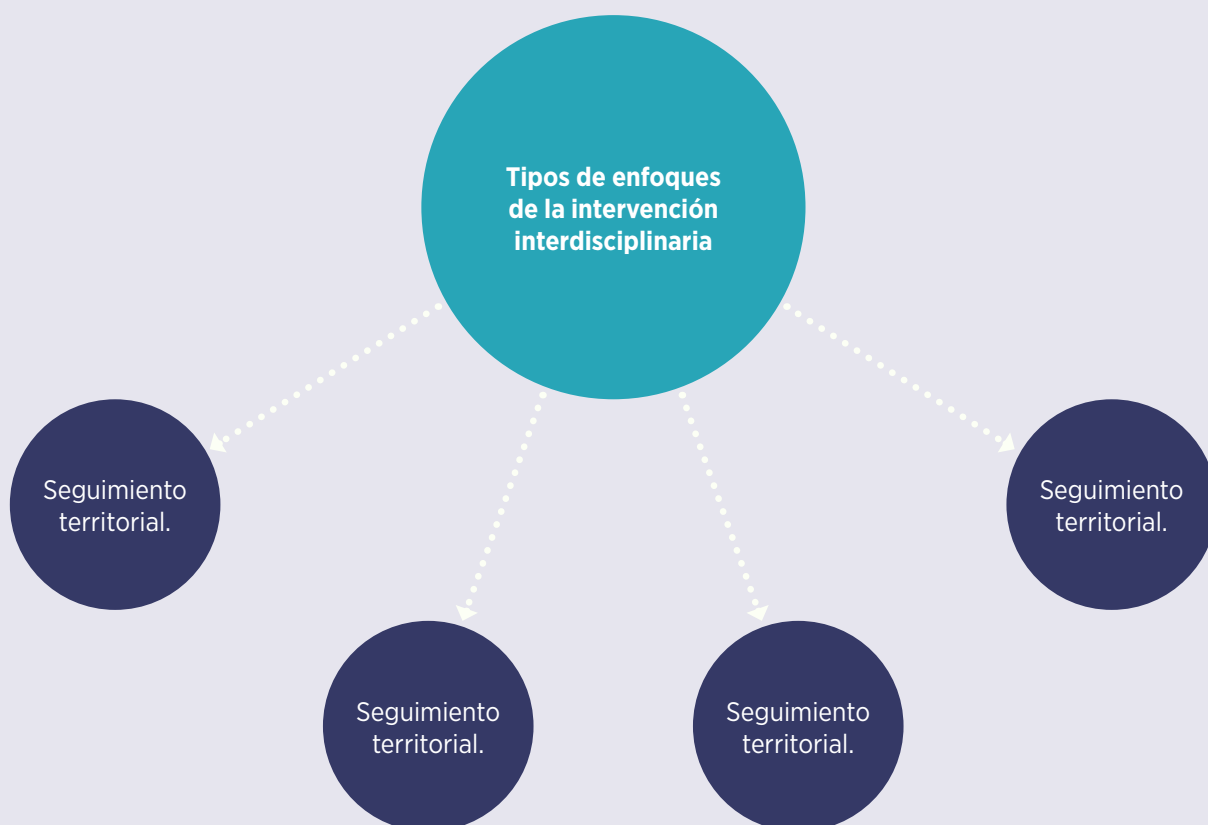
Es realizado tanto por los equipos judiciales como por los programas de «libertad asistida» dependientes del Poder Ejecutivo. El desarrollo y las características del seguimiento pueden combinar en distintos grados el control del comportamiento y la verificación de acuerdos en territorio (paradigmáticamente, la verificación de la asistencia a la escuela, el tratamiento psicológico, el cumplimiento de exclusiones y de horarios, etcétera); la intervención en el acceso a derechos de manera directa o mediante derivación o articulación; la inserción de los jóvenes en distintos recursos y dispositivos para la ampliación y diversificación de sus planes de vida y la generación o apoyo a «sus intereses».



Enfoques restaurativos

Con una presencia mucho menor y fundamentalmente impulsados por algunos profesionales que en los últimos años se han capacitado en prácticas de justicia restaurativa o en mediación penal juvenil, se observa que algunos equipos interdisciplinarios identifican casos en los que proponen la implementación de medidas alternativas. De esta manera, como veremos, intentan impeler a otros actores del fuero (fiscales, defensores, magistrados) para que acepten la instrumentación de una medida alternativa y realicen la derivación del caso a los dispositivos específicos sobre medidas alternativas al proceso penal o bien la implementan ellos mismos.

Gráfico 8. Tipos de enfoques de la intervención interdisciplinaria



3.6.4.

Finalidad del abordaje

En relación con la idea de responsabilización subjetiva del adolescente infractor, se ha advertido que se trata de un concepto escasamente definido. De manera casi unánime, los equipos de seguimiento territorial plantean trabajar en torno al logro de tal responsabilización. Sin embargo, solo algunos plantean que intentan establecer indicadores vinculados con la criminalidad

y no solo con dimensiones emocionales o morales del joven. En general, al no contarse con lineamientos específicos, la interpretación sobre en qué consiste el trabajo en la responsabilización subjetiva depende de cada operador.

En algunos fueros, agentes de equipos interdisciplinarios entrevistados se han referido a un trabajo que busca la responsabilización que se alcanza a través de estimular a los adolescentes a que reflexionen en torno a las consecuencias de su accionar y a que fomenten la empatía hacia la víctima del delito o transgresión que cometieron, bajo la consigna de ponerse «en el lugar del otro». En otros casos,

los equipos interdisciplinarios señalan que trabajan la responsabilización «de manera general», sin protocolos de intervención ni objetivos específicos en torno a qué significa. En este contexto, la manera y la intensidad con que se trabaja el tema dependen exclusivamente de cada operador.

El trabajo con la responsabilización del adolescente antes de que sea declarado «responsable» es problemático para algunos actores. Básicamente porque interpretan que habilitar o legitimar ese tipo de trabajo podría vulnerar el derecho a la defensa de los adolescentes. Este es un punto de controversias y también, para algunos actores, puede llegar a resultar sumamente dilemático desde una perspectiva filosófica, debido a que consideran que trabajar con la responsabilización es ir en contra del principio de inocencia. Esto provoca, incluso, resquemores de varios actores hacia la aplicación de medidas alternativas al proceso penal. Esta fue una de las razones que la defensa

pública esgrimía, en uno de los casos observados, para oponerse a la utilización de medidas alternativas. Durante bastante tiempo constituyó un importante obstáculo para la aceptación y expansión de este tipo de medidas alternativas.

Distintos operadores procuran apartarse de esa perspectiva y señalan la importancia de la confidencialidad en este tipo de intervenciones. Además, plantean que es importante trabajar con aquellos jóvenes que desde un principio pueden asumir y reconocer que su conducta produjo un daño. Esto es, con adolescentes que perciban que en esa infracción pudo haber personas que se hayan asustado o a las que les haya pasado algo. Así, estos operadores señalan que no les preocupa tanto si, por ejemplo, se trató de un robo menor —típicamente, el robo de celulares—, «sino si hubo violencia y qué pasó ahí».



En este sentido, los operadores entrevistados reconocen que no solamente para la defensa es difícil de aceptar sino también para los abogados del propio juzgado, en tanto interpretan que ese tipo de trabajo supone preguntar sobre la responsabilidad y avanzar sobre la causa y que ello también puede ser confuso para el propio adolescente.

Una característica de las intervenciones es que tienden a realizarse de manera individual hacia los jóvenes. En escasas oportunidades incluyen acciones grupales y actividades con las familias y redes socioafectivas de los adolescentes y rara vez exceden el diagnóstico de necesidades.

En la totalidad de las jurisdicciones reconocen que los equipos interdisciplinarios especializados y, específicamente, los operadores de los programas alternativos a la privación de libertad dependientes del Poder Ejecutivo trabajan con las familias. Este trabajo puede variar entre el apoyo a la gestión de recursos, el acceso a programas y el apoyo para «comprometerse con el proceso del joven». En algunos casos se han instrumentado talleres para padres y madres de jóvenes privados de la libertad.

El tipo de trabajo desarrollado varía y existen distintos criterios para llevarlo adelante. Por ejemplo, para algunos equipos interdisciplinarios dependientes de los organismos administrativos, el trabajo con la familia no debe ser intrusivo. Estos equipos privilegian que las entrevistas con los padres del adolescente o con otros refe-

rentes familiares no ocurran dentro de la casa. Ello se basa en la necesidad de apartarse de la típica y tradicional «visita al domicilio» en la que se inspeccionaba desde la distribución espacial del hogar hasta las condiciones de orden y limpieza. Eso se volcaba en los informes y era tenido como indicador de posibles disfuncionalidades. De esta manera, para contrarrestar ese tipo de prácticas, algunos profesionales insisten en el hecho de que no es necesario concurrir personalmente al domicilio donde reside el adolescente para trabajar con la familia. En algunas jurisdicciones, sin embargo, esto es valorado de forma negativa por los magistrados que lo ven como una suerte de falta de compromiso con la tarea.

En cuanto al valor de las entrevistas con las familias, algunos profesionales indicaron que estas suelen dar la oportunidad de hacer sugerencias a los integrantes de las familias para desnaturalizar situaciones problemáticas que no son consideradas como tales.

En algunas jurisdicciones se ha remarcado que el trabajo con las familias se reduce a trabajar con la madre del adolescente. Fundamentalmente, porque son las mujeres quienes desempeñan casi con exclusividad las tareas de cuidado de sus hijos y los acompañan en el proceso judicial. En todos los casos, se ha remarcado la crítica situación social que atraviesan las familias de los adolescentes que provienen de los barrios más vulnerables. En relación con



ello también se ha resaltado que existen determinadas zonas que son calificadas como «de muy difícil acceso» y a las que no concurren los operadores interdisciplinarios del Poder Judicial ni los de los organismos administrativos.

Otra cuestión que fue señalada como obstáculo al trabajo con las familias es la presencia de redes de narcotráfico en los barrios. Esto, junto con la escasa oferta de efectores que trabajan el tema del consumo problemático de sustancias, ha sido señalado como un importante déficit.

Las apreciaciones sobre el trabajo con las familias se enlazan con supuestos sobre sus capacidades y potencialidades. Algunos entrevistados tendieron a resaltar lo que entienden como una falta de compromiso

de la familia en relación con sus hijos —«no se hacen cargo», «no pueden»— mientras que otros compusieron una interpretación que tiene más en cuenta las condiciones materiales y sociales en las que esos grupos familiares están insertos.

Algunos operadores interdisciplinarios relataron que las charlas con las familias les permiten tener una mirada más integral de la situación por la que atraviesa el joven. El diálogo que mantienen con los familiares les permite idear estrategias de abordaje y también la actitud de la familia es tenida en cuenta para proponer o implementar medidas alternativas.

3.7

Buenas prácticas en justicia restaurativa y abordaje interdisciplinario

Presentamos algunos hallazgos significativos relevados en la investigación que permiten visualizar prácticas promisorias de implementación de justicia restaurativa o abordajes interdisciplinarios. Para ello, utilizamos dimensiones relevantes consignadas en la literatura y en la propia investigación de manera inductiva.



Normativa judicial que promueve la desjudicialización

En relación con esta dimensión, se han identificado prácticas que han permitido abonar un camino de transformación en las prácticas de la justicia penal juvenil. Ellas son:

- Reformas al Código Procesal Penal que proponen un nuevo paradigma en el abordaje de los conflictos. Se plantea que los fiscales y los jueces tienen que buscar la solución al conflicto antes que la aplicación de una pena, resolver el problema antes que la causa judicial. Esto, combinado con la existencia de una ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, crea las condiciones para implementar un diseño institucional que también favorece la aplicación de medidas alternativas. En efecto, la instauración de un sistema adversarial en donde el peso del impulso procesal recae en un fiscal penal juvenil, junto a la existencia de jueces penales juveniles, así como de dispositivos judiciales (programas de mediación) y extrajudiciales (programa de Libertad Asistida) creados por ley, contribuyen a generar cierta propensión hacia la aplicación de medidas alternativas.
- Acuerdos de tribunales superiores de justicia mediante los que se instrumentó la mediación en los casos derivados de los juzgados penales juveniles. Para ello, se organizaron capacitaciones y registros específicos con designación

de encargados de áreas (por ejemplo, de mediación a distancia).

- Desarrollo de una serie de protocolos de actuación para guiar la intervención, desde la aprehensión hasta el egreso del NNyA, que indican la realización de entrevistas interdisciplinarias de admisión, que son consideradas en el marco de la intervención: «La entrevista no es una intervención socioeducativa en sí misma, pero es un escenario posible para que en la misma se devuelva en palabras y actos lo que el NNyA relata», y a la vez establecen el legajo único y el traslado del Programa de Identificación y Alojamiento provisorio del NNyA al ámbito del CDNNyA. Han desarrollado además un protocolo para incorporar círculos restaurativos en el trabajo cotidiano de los centros cerrados y las residencias.
- Adhesión al Protocolo en Mediación Penal Juvenil Restaurativa y Acuerdos Restaurativos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
- Creación de una oficina central de mediación en la Procuración General. Si bien no está especializada en penal juvenil, lleva adelante tareas con el objetivo de incorporar la justicia restaurativa al abordaje con jóvenes en conflicto con la ley, lo que ha sido reconocido y plasmado en resoluciones de la misma Procuración General. Según algunos actores entrevistados, esta resolución ayudó a resolver algunas resistencias que existían a nivel de las fiscalías por

parte de algunos operadores que se negaban a usar la mediación por no considerarla una medida posible para el tipo de delitos cometidos por los jóvenes (por ejemplo, robo).

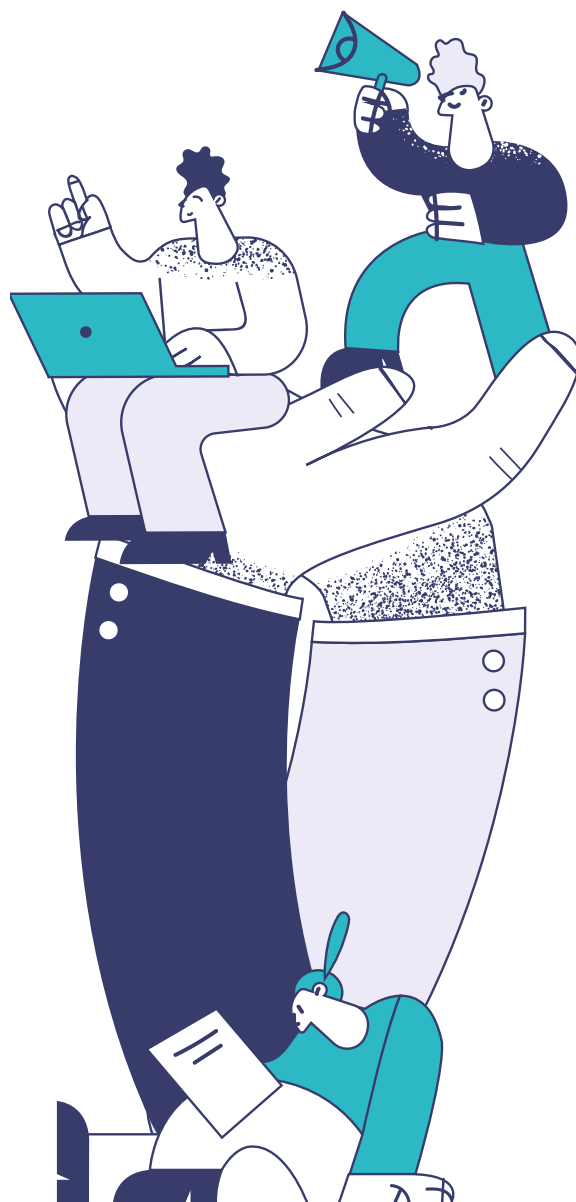
- La aprobación de unas Directrices de Justicia Juvenil, producto del trabajo articulado de un conjunto de organismos de diferentes niveles de gobierno. Se trata de una serie de recomendaciones para el abordaje de los NNyA en conflicto con la ley penal (desde la aprehensión hasta el egreso del sistema) que promueven la utilización de enfoques de justicia restaurativa.

Acciones de sensibilización

- La participación de fiscales en la Comisión de Justicia Restaurativa de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos constituye una fuente de sensibilización, ya que los fiscales participantes abogan activamente por la implementación de medidas alternativas al proceso.
- Las acciones de sensibilización llevadas adelante por integrantes de los equipos interdisciplinarios dependientes de una cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional tuvieron por resultado la elaboración de un proyecto para la aplicación de medidas alternativas que ha tenido buena receptividad y que —al momento de la realización del trabajo de campo— tenía muchas

posibilidades de ser aprobado. Asimismo, merece destacarse la labor de capacitación y formación que algunos delegados inspectores desarrollan en el marco de la asociación que los agrupa, a través de la cual han organizado cursos de capacitación en prácticas restaurativas.

- Áreas dedicadas a la capacitación en justicia restaurativa que realizan acciones de sensibilización a diversos actores e instituciones locales que lo solicitan.





Utilización de la mediación como medida alternativa

- La creación de un área de mediación penal del Poder Judicial, cuyos mediadores (abogados, psicólogos y trabajadores sociales) trabajan en equipos conformados por distintas disciplinas. Su intervención se inicia por derivación de la fiscalía y, si bien derivan fundamentalmente delitos leves, están empezando a derivar también delitos graves, como abusos y homicidios culposos. Brindan el espacio a voluntad y convocan a adultos referentes de los adolescentes. Realizan audiencias privadas con las partes e intentan propiciar un proceso reflexivo. Trabajan desde el enfoque de la justicia restaurativa.
- En otros casos existen hasta dos ámbitos de mediación penal a los que el fiscal puede enviar las actuaciones, una oficina de mediación y conciliación penal del Ministerio Público Fiscal, y un programa de mediación penal de la Defensoría del Pueblo. Ambos programas están integrados por profesionales con amplia experiencia en mediación en el delito juvenil.
- La existencia de un programa de mediación penal juvenil con casi veinte años de existencia y mucha legitimidad dentro del Poder Judicial, aunque depende del Poder Ejecutivo. Interviene con los adolescentes, las víctimas, y las familias. Sin embargo, a pesar de su larga trayectoria y reconocimiento a nivel provincial, los recursos disponibles le permiten abarcar escasas localidades, principalmente la ciudad capital.

Utilización de la conciliación para desjudicializar

- Los defensores públicos derivan casos a un programa de resolución alternativa de conflictos y, si se llega a un acuerdo entre las partes, la causa vuelve a la defensoría que derivó el caso, presenta el acuerdo en el expediente y corre vista al fiscal. Luego, si el juez homologa el acuerdo, se extingue la acción penal y se dicta el sobreseimiento.

Utilización del principio de oportunidad para desjudicializar

- Fiscales con posibilidad de aplicar este instituto, lo que les permite renunciar a iniciar un proceso penal cuando consideran que la gravedad del hecho o la nimiedad del daño ocasionado a la víctima así lo justifican.

Sistema de monitoreo y evaluación/sistemas de información y seguimiento

- Desarrollo de sistemas estadísticos y de monitoreo que les permiten obtener información sobre la cantidad de causas derivadas y el resultado de las intervenciones. En general, no tienen reingresos.

Territorialización y gestión de cercanía

- Creación de una unidad de medidas alternativas a la privación de la libertad que depende del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de la provincia. La unidad está integrada por operadores formados en trabajo social, realiza un trabajo de articulación con la comunidad a través de la firma de convenios con PyMES y universidades a fin de que los adolescentes puedan capacitarse para lograr una salida laboral y de ayudarlos en su inserción social. Trabajan en el territorio y con los contextos sociales y familiares. Buscan fortalecer y, en muchos casos, generar el vínculo del NNyA con sus familias.



- Creación de centros sociocomunitarios dependientes del Poder Ejecutivo que articulan con la justicia para el desarrollo de medidas alternativas a la pena y también al proceso. Se trata de dispositivos de seguimiento territorial de medidas penales alternativas a la privación de libertad (cautelares o sancionatorias, como cumplimiento de reglas de conductas como primera medida o como morigeración luego de la privación de libertad o suspensión del juicio a prueba) en el fuero de responsabilidad penal juvenil. Existen en toda la provincia. Su intervención deviene central tanto para la inserción social de los jóvenes en su comunidad en el marco de la medida penal como para el trabajo sobre la responsabilidad subjetiva.

Articulación interinstitucional

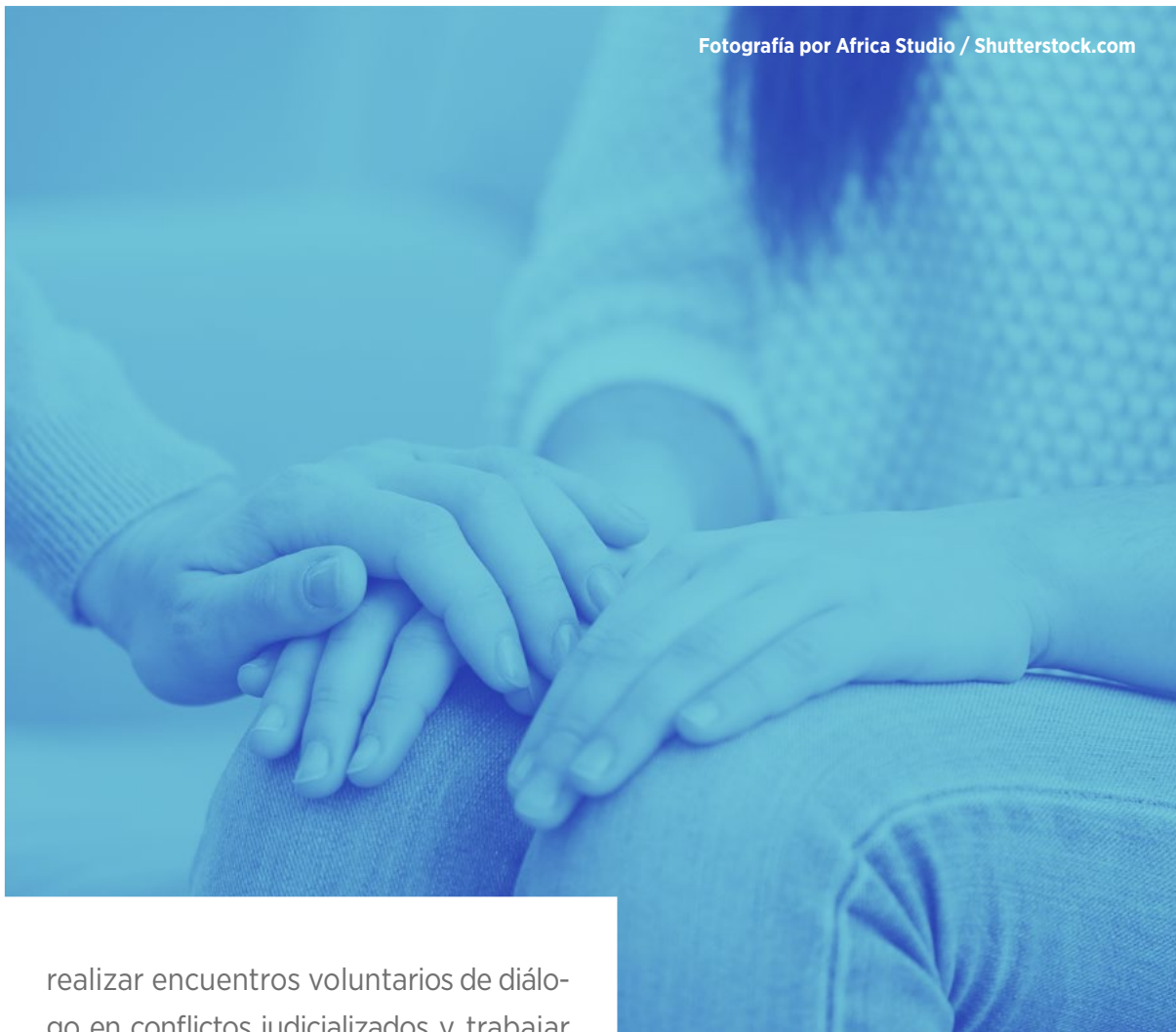
- Creación de una mesa de corresponsabilidad penal juvenil con el objetivo de acordar criterios de intervención y proveer mayor previsibilidad a las articulaciones entre los diferentes actores y organismos involucrados en la temática penal juvenil.
- Creación de un área de mediación, resolución alternativa de conflictos penales y justicia restaurativa dentro del fuero de responsabilidad penal juvenil, que fue el resultado de una articulación institucional entre la Defensoría y la Fiscalía General y cuenta con gran legitimidad en el campo penal juvenil del departamento judicial.

Definición operativa de «responsabilidad subjetiva»

- Desarrollo de estrategias de trabajo en torno a la «responsabilización subjetiva» de la «restitución de derechos». La responsabilización subjetiva se trabaja en torno a «indicadores penales» distintos de los indicadores terapéuticos, sociales, de trayectoria o de proyecto de vida.
- Referencia a la «transformación subjetiva» como horizonte de su intervención. Esta trasciende el mero cumplimiento de la medida penal impuesta por el juez y se refiere a una modificación más amplia de la forma de vida en vistas a la inserción social. La responsabilización subjetiva es, según los profesionales entrevistados, un intento de reposicionamiento subjetivo de parte del joven, a partir del cual reconozca y comprenda cuál fue el contexto que lo llevó a transgredir.

Diseño de programa

- El diseño de un programa de resolución alternativa de conflictos dentro de una Defensoría General, aun cuando solo se implementa por derivación de un defensor y solo cuando sea posible aplicar la extinción de la acción penal por conciliación o reparación integral, constituye una experiencia a destacar. El diseño del programa prevé como objetivo



realizar encuentros voluntarios de diálogo en conflictos judicializados y trabajar subjetivamente con los jóvenes desde un enfoque restaurativo. Además, prevé la realización de reuniones con las víctimas para explorar sus necesidades y evaluar la conveniencia de realizar un encuentro con el joven. El objetivo es que el adolescente pueda reconocer que hay otro que fue dañado.

- La creación de un centro de articulación, orientación y resolución alternativa de conflictos, creado formalmente por una fiscalía general provincial. Este centro tiene un protocolo de actuación a través del que intervienen —mayoritaria, pero no exclusivamente— en delitos leves. Los destinatarios son adolescentes y víctimas que tengan voluntad de participar.
- El trabajo dentro de una área de mediación, resolución alternativa de conflictos penales y justicia restaurativa del fuero de responsabilidad penal juvenil con los adolescentes y con las víctimas, en cualquier momento del proceso, en cualquier situación procesal y sobre cualquier delito. Lo hacen desde la perspectiva de la justicia restaurativa. El programa, que originalmente surgió desde la defensa, se reconfiguró como una articulación institucional entre la Defensoría y la Fiscalía General, lo cual permitió aumentar la cantidad de causas derivadas al área y dotar de mayor legitimidad al uso de la justicia restaurativa en el campo penal juvenil del departamento judicial.

Existencia de un programa con agentes con legitimidad para el desarrollo de medidas alternativas al proceso penal

- Existencia de programas de mediación penal juvenil, con casi veinte años de existencia y mucha legitimidad dentro del Poder Judicial.
- Existencia de un programa de mediación penal juvenil que trabaja con todo tipo de delitos, incluso casos graves como homicidio. Aunque goza de reconocimiento y legitimidad entre los actores del Poder Judicial, no ha logrado aún apoyo institucional.

Activismo judicial en materia restaurativa

- Algunos jueces han desarrollado diversas iniciativas que denominan «prácticas restaurativas» y que ellos mismos caracterizan como emprendimientos artesanales y ad hoc (círculos de paz, círculos de la palabra, configuraciones sistémicas o talleres para madres). Estas iniciativas cuentan con el aval de la Corte, pero parten de iniciativas propias y personales de los funcionarios judiciales.
- Desarrollo de círculos restaurativos en contextos de privación de libertad. Se

trata de un proyecto piloto que funciona desde el año 2019 en un centro cerrado y resulta una práctica novedosa para el trabajo de responsabilización subjetiva de los adolescentes.

- Profesionales de los cuerpos técnicos auxiliares (dependiente de las Cortes) realizan lo que denominan «pericias con enfoque restaurativo» orientadas a recomendar la derivación de casos a mediación.
- Defensorías que recurren a una medida que —si bien aún no se encuentra en vigencia— ha sido habilitada por la reforma de la Ley provincial: la solicitud del sobreseimiento tras seis meses de prueba cuando el acusado no comete otro hecho en ese período y sigue las pautas que se le fijaron.

En síntesis, si bien ha sido posible identificar buenas prácticas tendientes a implementar medidas alternativas al proceso penal y a expandir su utilización, en términos generales prevalece la asistematicidad y la fragmentación institucional. Asimismo, incluso estas buenas prácticas se encuentran con distintas dificultades para ser aceptadas y consideradas como formas legítimas de gestión de la conflictividad sociopenal adolescente. No obstante, se trata de experiencias interesantes y prometedoras, que podrían ser fortalecidas y expandidas a fin de mejorar la eficacia de la implementación de medidas alternativas al proceso penal.

Conclusiones

El logro y la sistematización de políticas penales juveniles específicas, interdisciplinarias y basadas en los principios de la justicia restaurativa en Argentina enfrenta numerosos desafíos. Entre los más destacados, se encuentran las dimensiones legales e institucionales que permitan dotar de sostenibilidad, pertinencia y eficacia a las medidas alternativas al proceso penal y a la pena, en especial la existencia de dispositivos interdisciplinarios con competencia en el desarrollo de tales medidas.

La aplicación de medidas alternativas es aún muy reducida en todas las jurisdicciones analizadas y subsisten muchas resistencias a su instrumentación. Existe también cierto desconocimiento de las posibilidades que ofrece la justicia restaurativa. El lugar que ocupa la interdisciplina en la gestión de la conflictividad sociopenal adolescente es disímil en las jurisdicciones abordadas, tanto en su modelo organizativo como en su enfoque de intervención. Existen dos

grandes modelos: los que tienen equipos interdisciplinarios dentro de los juzgados (Jujuy, Fuero Nación, Santa Fe) y los que tienen equipos externos (Mendoza, Neuquén, provincia de Buenos Aires, Córdoba). Estos modelos presentan variaciones en su dependencia y nivel de especialidad, así como en los alcances de la intervención, los modos de relacionamiento con los operadores judiciales y los tipos de tareas desempeñadas.

Más allá de la diferencia entre modelos organizativos, las tareas desarrolladas por los agentes con formación en disciplinas sociales y humanas se orientan principalmente a proveer información al juez o a otros funcionarios judiciales. Se destaca así la función pericial, que consiste, en general, en la indagación de la situación sociofamiliar del joven para dar cumplimiento a las medidas tutelares o socioeducativas previstas en el régimen penal de la minoridad. Desde esta perspectiva, la interdisciplina se suele reducir a la presentación de informes.

No obstante el amplio reconocimiento normativo, social y cultural del enfoque de derechos de los NNyA (Beloff, 2008), el conflicto penal es un tema socialmente problematizado, cuyo debate, tratamiento y traducción administrativa (Fraser, 1991) en el Estado es controvertido y ampliamente debatido.

La aplicación de medidas alternativas aún enfrenta resistencias —por parte de las defensas, pero también de los magistrados y de los fiscales—. Se observa también una desvinculación importante entre los distintos actores del proceso penal y cierta falta de canales institucionalizados de comunicación entre fiscales, defensores y jueces, que permitan viabilizar medidas que desjudicialicen los conflictos. Estas dimensiones reflejan el carácter socialmente

controvertido de la conflictividad penal juvenil y la relevancia que adoptan los actores concretos y los debates, acuerdos y consensos para viabilizar la institucionalización de los principios de derechos humanos.

Más allá de estas complejidades y resistencias, el análisis ha podido identificar buenas prácticas tendientes a implementar medidas alternativas al proceso penal y a expandir su utilización. Estas experiencias interesantes y prometedoras deben ser sistematizadas e institucionalizadas para promover su aceptación como formas legítimas de gestión de la conflictividad sociopenal adolescente.



Referencias

Apéndices

Tabla A 1. Recursos interdisciplinarios existentes según año de creación, dependencia, operadores y modalidad de contratación

	Dispositivo	Año de creación	Dependencia	Operadores	Contratación
Neuquén	Equipo interdisciplinario	2014	Ministerio Público Defensa	3	Planta permanente
	Gabinete Pericial - Infanto Juvenil	S/D	Poder Judicial	S/D	S/D
	Libertad asistida	1999	Poder Ejecutivo	13	
Santa Fe	Equipo social	S/D	Poder Judicial	30 (en toda la provincia)	Planta permanente
	Equipo interdisciplinario	1998	Poder Judicial	5	Planta permanente
	Libertad asistida	1997	Poder Ejecutivo	18 (Santa Fe) 20 (Rosario)	S/D
	Oficina de Mediación Penal (no especializada)	S/D	Poder Judicial	6 (Rosario)	Planta permanente
Jujuy	Gabinetes interdisciplinarios	1993	Poder Judicial	10	Planta permanente
	Libertad asistida	2014	Poder Ejecutivo	4 (San Sdor) 3 (San Salvador- valle) 3 (San Pedro) 3 (Calilegua)	S/D
	Equipo técnico CADT	2016	Poder Ejecutivo	11	S/D
Córdoba	Equipo técnico de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género - Córdoba	1980 aprox.	Poder Judicial	23	Planta permanente y contrato
	Libertad asistida	1998	Poder Judicial	5	Planta permanente
	Servicios zonales	S/D	Poder Ejecutivo	S/D	S/D
	Equipo técnico	2011	Ministerio Público Defensa	4	S/D
	Equipo técnico - Río Segundo (no específico del fuero)	S/D	Poder Judicial	3	Planta permanente y contrato

	Dispositivo	Año de creación	Dependencia	Operadores	Contratación
PBA*	Cuerpo técnico auxiliar	2008	Poder Judicial	225 (toda la provincia)	Planta permanente
	CESOC	S/D	Poder Ejecutivo	11 (San Isidro) 22 (Lomas de Zamora) 24 (San Martín) 25 (La Matanza)	Planta permanente y contrato
	Oficina Central Mediación	S/D	Procuración General	S/D	S/D
Fuero Nación	Equipos interdisciplinarios - Delegados inspectores	S/D	Poder Judicial	77	Planta permanente
	Cuerpo médico forense	S/D	Poder Judicial	S/D	S/D
	Peritos interdisciplinarios	S/D	Ministerio Público Defensa	3	S/D
	Programa de Resolución Alternativa de Conflictos	2012 / 2016	Defensoría General de la Nación	5	Planta permanente
	Derechos y alianzas territoriales	2016	Poder Ejecutivo		Planta (temporal y permanente)
	Programa de Atención Integral Adolescentes (PAIAS)		Poder Ejecutivo	40	Planta (temporal y permanente)
Mendoza	Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI)		Poder Judicial	117	Planta permanente
	Área de Mediación Penal	2006/07	Poder Ejecutivo	13	Planta permanente y contrato
	EDEAS		Ministerio Público Fiscal	5	S/D
	Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género (EPI)		Ministerio Público Fiscal	S/D	S/D
	Unidad de Medidas Alternativas		Poder Ejecutivo	68	S/D

Tabla A 2. Recursos interdisciplinarios según dependencia y profesión

	Dispositivo	Dependencia	Psico	TS	Otros	Total
Neuquén	Equipo interdisciplinario	Ministerio Público Defensa	1	1	1 Psiquiatra	3
	Gabinete Pericial - Infante Juvenil	Poder Judicial	S/D	S/D	S/D	S/D
	Libertad asistida	Poder Ejecutivo	5	2	3 operadores sociocomunitarios / 3 talleristas	13
Santa Fe	Equipo social	Poder Judicial		30		30 (en toda la provincia)
	Equipo interdisciplinario	Poder Judicial	1	2	1 Psiq / 1 Psicopedagoga	5
	Libertad asistida	Poder Ejecutivo	S/D	S/D	18 (Santa Fe - TS, Psi y Operadores) 20 (Rosario - TS, Psi, pedagogos, musicóloga)	38
	Oficina de Mediación Penal (no especializada)	Poder Judicial	S/D	S/D	S/D	6 (Rosario)
Jujuy	Gabinetes interdisciplinarios	Poder Judicial	3	3	1 psiq / 1 psicoped / 1 médico leg. / 1 ciencias educación	10
	Libertad asistida	Poder Ejecutivo	2	3	7 operadores territoriales / 1 enfermero	13
	Equipo técnico CADT	Poder Ejecutivo	1	2	9 operadores convivenciales	11
Córdoba	Equipo técnico de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género - Córdoba	Poder Judicial		2	1 Prof. música / 1 abogado / 2 administrativos / 2 operadores convivenciales / 15 personal de seguridad	23
	Libertad asistida	Poder Ejecutivo	S/D	S/D	S/D	S/D
	Servicios zonales	Poder Ejecutivo	14	9	23 prof: 14 Psi y 9 TS	23
	Equipo técnico	Ministerio Público Defensa	2	2		4
	Equipo técnico - Río Segundo (no específico del fuero)	Poder Judicial	1	2		3

	Dispositivo	Dependencia	Psico	TS	Otros	Total
PBA*	Cuerpo técnico auxiliar	Poder Judicial	15 (en localidades relevadas)	30 (en localidades relevadas)	3 psiq / 8 médicos / 1 administrat	225 (toda la provincia)
	CESOC	Poder Ejecutivo	S/D	S/D	S/D	11 (San Isidro) 22 (Lomas de Zamora) 24 (San Martín) 25 (La Matanza)
	Oficina Central Mediación	Procuración General	S/D	S/D	S/D	S/D
Fuero Nación	Equipos interdisciplinarios - Delegados inspectores	Poder Judicial	S/D	S/D	S/D	77 (psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, lic. en Ciencia Política)
	Cuerpo médico forense	Poder Judicial	S/D	S/D	S/D	S/D
	Peritos interdisciplinarios	Ministerio Público Defensa	2	1		3
	Programa de Resolución Alternativa de Conflictos	Defensoría General de la Nación		1	4 abogados	5
	Derechos y alianzas territoriales	Poder Ejecutivo	S/D	S/D	S/D	S/D
	Programa de Atención Integral Adolescentes (PAIAS)	Poder Ejecutivo	S/D	S/D	S/D	40
Mendoza	Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI)	Poder Judicial	27	74	8 psiquiatras / 7 clínicos	116
	Área de Mediación Penal	Poder Judicial	S/D	S/D	S/D	13 (abogados, psicólogos, trabajadores sociales)
	EDEAS	Ministerio Público Fiscal	S/D	S/D	S/D	5
	Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género (EPI)	Ministerio Público Fiscal	S/D	S/D	S/D	S/D
	Unidad de Medidas Alternativas	Poder Ejecutivo	S/D	S/D	S/D	68

Bibliografía

- Álvarez Travieso, Ma. F. (2008). “El fortalecimiento de las capacidades institucionales de coordinación como objetivo estratégico de la modernización del Estado”, en *XIII Congreso Internacional del CLAD sobre la reforma del Estado y de la Administración Pública*, 4-7 de noviembre de 2008, Buenos Aires.
- Beloff, M. (2008). “La justicia especializada para menores infractores”, en *Revista de Derecho Penal y Procesal Penal*.
- Bolívar, D. (2011). “La víctima en la justicia restaurativa: Reflexiones desde una perspectiva psico-social”, en I. Olaizola y P. Francés (Eds.), *Justicia Restaurativa y Mediación*, Ediciones Universidad Pública de Navarra, Pamplona.
- Bonta, J., Jesseman, R., Rugge, T. y Cormier, R. (2006). “Restorative Justice and Recidivism: Promises Made, Promises Kept?”, en D. Sullivan y L. Tifft (Eds.), *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, Taylor y Routledge, Londres.
- Burgos, A. (2018). “Los trabajos de utilidad pública como alternativa a la sanción privativa de libertad en el campo penal juvenil”, en A. Quintero (Ed.), *Aportes para una justicia especializada para jóvenes en el conflicto con la ley penal*, Editorial Jusbaire, Buenos Aires, pp. 185-220.
- Cave, G. (2005). “Dónde estamos actualmente: Una visión general de la evolución de la programación basada en derechos”, en *Children Rights Information Network*, 18, pp. 4-6.
- Choya Forés, N. (2015). Prácticas restaurativas. Círculos y conferencias, en *Revista Pensamiento Penal*, <http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/07/doctrina41593.pdf>.
- Corte Suprema de Justicia de la Nación. Comisión Nacional de Acceso a la Justicia. (2018). *Diagnóstico de situación sobre mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC) en Argentina*, Buenos Aires.
- Daroqui, A. y Guemureman, S. (1999). “Los menores de hoy, de ayer y de siempre: Un recorrido histórico desde una perspectiva crítica”, en *Revista Delito y Sociedad*, X, pp. 35-69.
- Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal. (2017). *Vulnerabilidad social, adicciones y prácticas delictivas*.
- Domingo de la Fuente, V. (2018). “La importancia de la justicia restaurativa para la justicia juvenil”, en A. Quintero (Ed.), *Aportes para una justicia especializada para jóvenes en el conflicto con la ley penal*, Editorial Jusbaire, Buenos Aires, pp. 141-166.

- Fernández, M. y Baquero, R. (2013). “Jóvenes y delito: Discursividades mediáticas y exclusión simbólica”, en *Cuadernos de H Ideas*, 7(7), Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata. Disponible en: <http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/cps/index>.
- Ferrajoli, L. (1994). “El derecho como sistema de garantías”, en *THÉMIS-Revista De Derecho*, 29, Lima, pp. 119-130.
- Fraser, N. (1991). “La lucha por la interpretación de las necesidades: Esbozo de una teoría crítica socialista-feminista de la cultura política del capitalismo tardío”, en *Debate Feminista*, 3. Disponible en: <https://doi.org/https://doi.org/10.22201/cieg.2594066xe.1991.3.1493>.
- Garzaniti, R. y Romero, P. (2018). “Atención integral de la salud: La interdisciplina como herramienta fundamental”, en *Anuario Temas en Psicología*, 4, Universidad Nacional de La Plata, pp. 275-294.
- Graziano, F. (2017). *Pequeños juicios. Moralidades y derechos en la administración judicial para “menores” en la Ciudad de Buenos Aires*. Antropofagia, Buenos Aires.
- Graziano, F. (2018). “Qué, cómo y cuánto se escribe en los documentos de la burocracia judicial para ‘menores’ en la Ciudad de Buenos Aires”, en *Etnográfica*, 22(3), pp. 531-553.
- Grindle, M. (1996). *Challenging the State: Crisis and Innovation in Latin America and Africa*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Guendel González, L. (2002). “Políticas públicas y derechos humanos”, en *Revista de Ciencias Sociales*, III, Universidad de Costa Rica, pp. 105-125.
- Gusdort, G. (1977). “Passé, présent, avenir de la recherche interdisciplinaires”, en *Revue internationale de Sciences Sociales*, Unesco XXIX, citado en J. González Cabañas: *Una mirada interdisciplinaria del adolescente en conflicto con la ley penal*, s/f.
- Guzmán, V. (2001). *La institucionalidad de género en el Estado. Nuevas perspectivas de análisis*. CEPAL: Santiago de Chile.
- Hall, J. S. (2002). “Reconsidering the Connection Between Capacity and Governance”, en *Public Organization Review: A Global Journal*, 2, pp.23-43.
- Hayes, H. (2005). “Assessing Reoffending in Restorative Justice Conferences”, en *The Australian Journal of Criminology*, 38(1), pp. 77-101.
- Hilderbrand, M. y Grindle, M. (1994). *Building Sustainable Capacity: Challenges for the Public Sector*. Harvard Institute For International Development. Harvard University: Cambridge.
- Instituto Interamericano del Niño. (s/f). *Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad*.

- Kilkelly, U., Forde, L. y Malone, D. (2016). *Alternativas al internamiento para menores infractores. Guía de buenas prácticas en Europa*. Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ): Bruselas.
- Latimer, J., Dowden, C. y Muise, D. (2005). "The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis", en *Prison Journal*, 85(2), pp. 127-144.
- Marín González, C. (2004). *Fortalecimiento de los Procesos de Gestión del Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (PRIDENA): una propuesta desde la gerencia social*. Informe final de residencia práctica para optar por el título de Magistra en Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social. Disponible en: <http://www.ts.ucr.ac.cr>.
- Miers, D. y Willemsens J, (eds). (2004). *Mapping Restorative Justice: Developments in European Countries*. Leuven: European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice.
- McCold, P. (2003). "A Survey of Assessment Research on Mediation and Conferencing", en L. Walgrave (ed.), *Repositioning Restorative Justice*, Willan Publishing, Devon, pp. 67-120.
- Medan, M. (2016). "Justicia restaurativa y mediación penal con jóvenes: Una experiencia en San Martín, Buenos Aires", en *Delito y Sociedad*, 1(41), pp. 77-106.
- Medina, F. (2019). *Recorridos frecuentes. Una etnografía en el campo penal juvenil de Santiago del Estero, Argentina*. Tesis de doctorado, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, San Miguel de Tucumán.
- Menéndez E. L. (1988). "Modelo médico hegemónico y atención primaria", en *Segundas Jornadas de Atención Primaria de la Salud*, 30 de abril al 7 de mayo, Buenos Aires, pp. 451-464.
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. (2018). *Protocolo en mediación penal juvenil restaurativa y acuerdos restaurativos*. Ediciones SAIJ: Buenos Aires. Disponible en: <http://www.bibliotecadigital.gob.ar/items/show/1778>.
- Naciones Unidas. (2019). *Observación General N.º 24 relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil*, Comité de los Derechos del Niño, CRC/C/GC/24.
- O'Donnell, G. (2001). "La irrenunciabilidad del Estado de derecho", en *Revista Instituciones y Desarrollo*, 8 y 9, Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya, Barcelona.
- Rodríguez Gustá, A. L. (2004). "Capacidades estatales: reflexiones en torno a un programa de investigación", en *VI Jornadas de Sociología*, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

- Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Subsecretaría de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia, Dirección Nacional para Adolescentes Infractores de la Ley Penal. (2019). *Relevamiento Nacional de Dispositivos Penales Juveniles y su Población*. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Unicef: Buenos Aires.
- Shem-Tov, Y., Raphael, S. y Skog, A. (2021). Can Restorative Justice Conferencing Reduce Recidivism? Evidence From the Make-it-Right Program. NBER Working Paper No. 29150.
- Sherman, L. y Strang, H. (2007). “Reducing Harm to Victims and Restorative Justice in the UK: The Four Settings”, en *Restorative Justice: The Evidence*, The Smith Institute, London, pp. 62-68.
- Stolkiner, A. (2017). “El enfoque interdisciplinario en el campo de la salud/salud mental y la perspectiva de derechos”, en B. Fernández Castrillo (Comp.), *Salud mental, comunidad y Derechos Humanos*. Psicolibros Universitarios: Montevideo.
- Testa, M. (1989). *Pensamiento estratégico y lógica de programación (El caso de salud)*, Publicación N.º 11. Organización Panamericana de la Salud: Washington.
- Villalta, C. (2004). “Una filantrópica posición social: Los jueces en la justicia de menores”, en S. Tiscornia (Comp.): *Burocracias y violencia. Estudios*

de antropología jurídica, Equipo de Antropología Política y Jurídica, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Antropofagia, Buenos Aires, pp. 281-326.

- Villalta, C. y Llobet, V. (2011). “Estado de situación del sistema de protección integral de derechos en las provincias de San Juan y Mendoza”. Piubamas - SeNNAF.
- Villalta, C. y Llobet, V. (2014). “Los heterogéneos significados de la protección: Un análisis de los nuevos circuitos y dispositivos de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, en *Revista Derecho de Familia*, X, pp.293-317.

Documentos relevados

- Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes. (2018). Informe estadístico. *Intervenciones ante los Juzgados Nacionales de Menores*. Disponible en: <https://www.csjn.gov.ar/bgd/verMultimedia?data=3110>.
- Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes. (2019). *Informe estadístico sobre niños, niñas y adolescentes con intervención judicial*. Disponible en: <https://www.csjn.gov.ar/bgd/verMultimedia?data=3813>.

- Biblioteca del Congreso de la Nación. (2019). *Régimen Penal Juvenil. Legislación internacional, nacional y provincial. Dossier Legislativo.*
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. (2018). *Protocolo en mediación penal juvenil restaurativa y acuerdos restaurativos.* Ediciones SAJJ: Buenos Aires. Disponible en: <http://www.bibliotecadigital.gob.ar/items/show/1778>.
- Decálogo Iberoamericano sobre Justicia Juvenil Restaurativa. (2017).
- COMJIB. (2015). *Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos.*
- Comisión Provincial por la Memoria. (2015). *Informe anual.*
- Organización de las Naciones Unidas. (2016). *Recopilación de reglas y normas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal.*
- Organización de las Naciones Unidas. (2006). *Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa. Serie de Manuales sobre la Justicia Penal.* Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito: Nueva York.
- SeNNAF, Untref, Unicef. (2009). *Adolescentes en el Sistema Penal. Situación actual y propuestas para un proceso de transformación.* Buenos Aires: Unicef-SeNNAF.
- SeNNAF y Unicef. (2015). *Relevamiento nacional sobre adolescentes en conflicto con la ley penal.* Buenos Aires: Unicef-SeNNAF.
- SeNNAF (2018): *Reporte de gestión.* Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia: Córdoba.
- TDH. (2015). *Actuación de Terre des hommes en Brasil en materia de Justicia Juvenil.* Disponible en: <https://tdh.tierradehombres.org/actuacion-de-terre-des-hommes-brasil-en-materia-de-justicia-juvenil/>.
- UNODC. (2006). *Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal.*
- Unicef y SeNNAF. (2009). *Procedimientos penales juveniles: Estado de avance de la adecuación a la Convención sobre los Derechos del Niño en la reforma legislativa a nivel provincial.* Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
- Unicef. (2003). *Justicia Penal Juvenil.* Buenas prácticas en América Latina: Panamá.
- Unicef. (2018). *Justicia juvenil. Investigación sobre medidas no privativas de la libertad, y alternativas al proceso judicial en Argentina.* Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Buenos Aires. Disponible en: <https://www.unicef.org/argentina/media/3511/file/Justicia%20Juvenil.pdf>.

Listado de documentación recabada por jurisdicción

Buenos Aires

- PBA-LM PA CESOC Protocolo.
- PBA-LM PA CESOC Informe inicial.
- PBA-LM PA CESOC Informe final.
- PBA-LM PA CESOC Acta Acuerdo.
- PBA-LM PA CESOC Informe Avance.
- PBA-LM juzgado responsa DATOS ESTADÍSTICOS - J. de Resp. Penal Juvenil N.º 1 (1).
- PBA-LM juzgado responsa DATOS ESTADÍSTICOS - J. de Resp. Penal Juvenil N.º 1.
- PBA-LM juzgado responsa JÓVENES PRIVADOS DE LA LIBERTAD - J. de Resp. Penal Juvenil N.º 1.
- PBA-LM juzgado responsa TOTAL DE JÓVENES PROCESADOS - J. de Resp. Penal Juvenil N.º 1.
- PBA-LM juzgado responsa JÓVENES CON MÁS DE UN PROCESO ABIERTO - J. de Resp. Penal Juvenil N.º 1.
- PBA-LP Información adjunta.
- PBA-LP Protocolo Equipos Técnicos.
- PBA-LP Datos Adolescentes AL 32-12-2018.
- PBA-LP Protocolo Área Salud.
- PBA-LP Protocolos libros de guardia.
- PBA-LZ Gráficos estadísticos.
- PBA-LP Programa CESOC.
- PBA-SI Fiscalía - Estadísticas.
- PBA-SM CESOC Estadísticas 2018.
- PBA-SM CESOC Estadísticas 2017.
- PBA-SM CESOC Estadísticas por municipio.
- PBA-LZ Área Mediación - Resolución.
- PBA-LP Programa Nuevo CESOC.
- PBA-LP Informe actividades realizadas.
- PBA-LP CESOC Capacitaciones realizadas.
- PBA-LP Conformación Equipos CESOC.

Córdoba

- Ley 10.367 de junio de 2019, modificatoria de la Ley 9944 - Promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
- Acuerdo reglamentario TSJ N.º 1583 del 26 de agosto de 2019 (suspende modificación Ley 9944).
- Acuerdo reglamentario TSJ N.º 1432 del 3 de julio de 2017 (implementación Guía de buenas prácticas de la defensa).
- Acuerdo reglamentario TSJ N.º 1068 del 8 de agosto de 2011 (reasignación funciones equipos técnicos asesorías de niñez).

- Resolución N.º 319/2018 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Proyecto Socio-educativo Complejo Esperanza.
- Informe anual 2016 de equipos técnicos de Asesorías Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar.
- Juzgados Penales Juveniles - Capital - Estadísticas 2016.
- Informe 2016 - Adolescentes privados de libertad.
- Penal Juvenil 2017 - Trámite Ley 9944.
- Informe de Gestión SeNNAF 2018.
- Organigrama del Poder Judicial Córdoba Capital.
- Organigrama del Poder Judicial Interior de Córdoba.
- Organigrama de la Administración del Poder Judicial de Córdoba (área de la que dependen los equipos técnicos).
- Guía de buenas prácticas. Creación de la Oficina de Gestión y Apoyo de la Defensa de Niñez, Juventud y Violencia Familiar.
- Acuerdo de confidencialidad - Programa de Mediación de la SeNNAF.
- Acta de reuniones - Programa de Mediación de la SeNNAF.
- Acta de cierre - Programa de Mediación de la SeNNAF.
- Estadísticas 2017 - Programa de Mediación de la SeNNAF.
- Relevamiento Programa de Mediación de la SeNNAF - Diciembre 2017.
- Protocolo de Intervención penal juvenil - Equipo técnico Córdoba Capital.

Jujuy

- Datos estadísticos proporcionados por Libertad Asistida, CADT y Socio-educativos.
- Informe de gestión Programa de Adolescentes en conflicto con la ley penal.
- Informe de gestión Defensoría General MPD.
- Ley de Protección Integral de Jujuy.
- Ley de creación del Juzgado de Menores.
- Código Procesal Penal de Jujuy.

Santa Fe

- SFE-PE Planilla de Jóvenes Coordinación Sur - Norte - Santa Fe.
- SFE-PE Planilla de Jóvenes Coordinación Sur - Norte - Santa Fe (1).
- SFE-PE Planilla de Jóvenes Coordinación Sur - Norte - Santa Fe1.
- SFE-PJ Datos estadísticos Juzgado de Menores de la Primera Nominación.
- SFE-PJ Información estadística.
- SFE-PJ ET Informe social.
- SFE-PJ ET Informe social 2.
- SFE-PJ ET Propuesta de intervención del Equipo de Trabajadores Sociales.
- SFE-ROS PJ informe juzgado N.º 1 ROSARIO
- SFE-ROS PJ informe juzgado N.º 1 ROSARIO 1
- SFE-ROS PJ informe juzgado N.º 1 ROSARIO 2
- SFE-ROS PJ informe juzgado N.º 1 ROSARIO 3
- SFE-ROS PJ informe juzgado N.º 1 ROSARIO 4

- SFE-ROS PJ informe juzgado N.º 1 ROSARIO 5
- SFE-ROS PE LA Informe gestión 2019a.
- SFE-ROS PE LA APREMIOS.
- SFE-ROS PE LA Informe gestión 2019.
- SFE-ROS PE LA Nota reglamento.
- SFE-ROS PE LA Resolución.
- SFE-ROS Asesoría MARZO 2019.
- SFE-ROS Asesoría ABRIL 2019.
- SFE-ROS Asesoría MAYO 2019.
- SFE-ROS Asesoría JUNIO 2019.
- SFE-ROS Asesoría JULIO 2019.
- SFE-ROS Asesoría AGOSTO 2019.
- SFE-ROS Asesoría SEPTIEMBRE 2019.
- SFE- ROS PJ Manual organizacional del centro de mediación judicial de Rosario (físico).
- SFE- ROS PE LA Planillas para entrevistas Libertad Asistida (físico).
- SFE- ROS PE LA Informe de gestión Libertad Asistida Rosario y San Lorenzo (físico).
- SFE- ROS PE LA Material de difusión de la Defensoría de Derechos del Niño (físico).

Neuquén

- Datos estadísticos aportados por la Fiscalía Penal Juvenil.
- Planilla de hechos delictivos 2010-2018.
- Mapa de circunscripciones judiciales.
- Código Procesal Penal.
- Ley de Protección Integral 2302.
- Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal 2893.

Nación

- NAC Fiscalía Estadísticas.
- Resol-2017-21-APN-MJ Creación de la Comisión de Trabajo para un nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.
- Protocolo en Mediación Penal Juvenil Restaurativa y Acuerdos Restaurativos IF-2018-46313307-APN-SSJYPC#MJ.

Mendoza

- Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil - Manual de Procedimientos de la Unidad de Internación de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia - Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, 2013.
- Área de Mediación Penal - Cuerpo de Mediadores - Poder Judicial de Mendoza. Expedientes derivados desde Justicia Penal Juvenil.
- Mediación Penal Juvenil. Proyecto Piloto del Cuerpo de Mediadores del Poder Judicial, 2004.
- Acordada N° 21.612 bis, 2008.
- Coconstrucción de redes territoriales en el campo de la Mediación Penal Juvenil - Área de Mediación Penal del Cuerpo de Mediadores, 2018.
- Protocolo de Actuación ante Denuncias por Apremios Ilegales en Dispositivos Penales Juveniles, 2017.
- Protocolos de Ingreso, Intervención, Egreso y Derivación en Cad, versión borrador, 2017.

- Estructura Organizativa y Manual de Funciones de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil en acuerdo al Decreto 2605/2015.

CABA

- Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil - Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA).
- Resolución N.º 25/CDNNYA/18.
- 44 RS 2018 25 CAD.
- 45 RS 2018 1401 CAD.
- 46 RS 2019 1401 CAD Anexo 1.
- 47 RS 2019 1401 CAD Anexo 2 Legajo unificado.
- 48 RS 2018 1118 Creación Programa Derechos y Alianzas Territoriales (DyAT).
- 49 RS 2018 1118 DyAT.
- 68 y Creación del Programa de Acompañamiento e Inclusión en el Ámbito Sociocomunitario (PAIAS).
- 69 RS 2018 525 Creación del PAIAS - Anexo.
- 72 DI 2019 83 Proyecto Institucional PAIAS - Marco de las prácticas en la justicia restaurativa.
- 73 RS 2018 27 Residencias.
- 74 RS 2018 27 Residencias Anexo - Modelo de abordaje socio-educativo y restaurativo.
- 75 RS 2018 27 Residencias Anexo.
- 76 RS 2018 27 Residencias Anexo.
- 77 DI 2019 82 Residencias Libertad Restringida.
- 78 DI 2019 82 Residencias Libertad Restringida Anexo - Abordaje interdisciplinario.
- 79 DI 2019 82 Residencias Libertad Restringida Anexo - Abordaje interdisciplinario.
- 80 DI 2019 82 Residencias Libertad Restringida Anexo - Abordaje interdisciplinario.
- 81 RS 2019 1095 Aprobación de programa Centros Socio-educativos Régimen Cerrado.
- 82 RS 2019 1095 Aprobación de programa Centros Socio-educativos Régimen Cerrado Anexo. Asambleas Convivenciales.
- 83 DI 2019 80 Proyecto Institucional Régimen Cerrado.
- 84 DI 2019 80 Proyecto Institucional San Martín - Intervenir en los procesos de mediación y generar espacios de mediación protocolizados.
- 85 DI 2019 80 Rocca - Asambleas convivenciales.
- 86 DI 2019 80 Belgrano - Asambleas convivenciales.
- GCBA Indicadores de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, 2018.

